

master
INTERUNIVERSITARIO EN CULTURA DE
Paz CONFLICTOS, EDUCACIÓN
Y DERECHOS HUMANOS

TRABAJO FIN DE MÁSTER

2018/2019

Título: Elementos psicosociales y enfoque de género en comisiones de la Verdad y otros mecanismos de investigación en el marco de la Justicia Transicional

Autora: Maritza Yaneth Villarreal Duarte

Tutor: Eulogio García Vallinas



ANEXO I

El Dr. D. Eulogio García Vallinas profesor de la Universidad de Cádiz, con docencia en el *Master en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos*, en calidad de Tutor Académico de la alumna: Maritza Yaneth Villarreal Duarte

HACE CONSTAR, que ha asesorado y supervisado la elaboración del Trabajo Fin de Master titulado: *Elementos psicosociales y enfoque de género en comisiones de la Verdad y otros mecanismos de investigación en el marco de la Justicia Transicional*.

Y da su VISTO BUENO para que se proceda al Acto de Defensa.

En Puerto Real, a 10 de noviembre de 2019.

FIRMA



Agradecimientos

Quiero agradecer al cuerpo docente de la Universidad de Cádiz y especialmente a mi tutor Eulogio García Vallinas por su apoyo incondicional y sus orientaciones para el diseño y elaboración de esta investigación.

Agradezco a la Pontificia Universidad Javeriana por abrirme sus puertas para realizar mi estancia de investigación en convenio con la Universidad de Cádiz. A Carolina, Claudia, Marcela, María Lucía, todas docentes de la maestría en Abordajes Psicosociales para la Construcción de Paz; gracias por los espacios de conversación, de reflexión, por invitarme a participar en la Cátedra Internacional Ignacio Martín Baró y poner a dialogar estas ideas con otros colegas que aportan en la construcción de Verdad y Memoria en Colombia.

Gracias a mi familia y amigos por estar siempre para conversar, porque con ellos pude reflexionar, verme y respirar para continuar plasmando estas ideas que se fueron tejiendo en medio de viajes y nuevos capítulos de mi vida profesional.

Introducción	10
1. El tema de la Investigación	11
2. Objetivos y proceso seguido para la investigación	15
2.1 Objetivos.....	15
2.1.1 <i>Objetivo General</i>	15
2.1.2 <i>Objetivos Específicos</i>	16
2.2 Proceso seguido para la investigación.....	16
2.2.1 <i>Perspectiva Metodológica</i>	16
2.2.2 <i>Método</i>	17
2.2.3 <i>Técnicas de producción de datos</i>	18
2.2.4 <i>Selección de casos</i>	18
2.2.5 <i>Estrategia de Análisis</i>	19
3. Estado de la cuestión	20
3.1. Contexto y línea de tiempo de las Comisiones de la Verdad y otros mecanismos de investigación documentados.....	20
3.1.1. <i>Primer periodo 1974 a 1995: 21 comisiones</i>	20
3.1.2. <i>Segundo periodo 1996 a 2000: 7 comisiones</i>	22
3.1.3. <i>Tercer periodo 2001 a 2004: 14 comisiones</i>	23
3.1.4. <i>Cuarto periodo 2005 a 2010: 12 comisiones</i>	25
3.1.5. <i>Quinto periodo 2011 a 2018: 8 comisiones</i>	27
3.2. Hallazgos psicosociales	28
3.2.1. <i>Acompañamiento psicosocial</i>	29
3.2.2. <i>Informes de comisiones de la verdad con análisis específico de daños psicosociales y/o psicológico</i>	33
3.2.3. <i>Consideraciones psicosociales del testimonio</i>	36

3.2.4. Informes de comisiones de la verdad que presentaron recomendaciones para la reparación del daño psicosocial y/o psicológico	37
3.3. Elementos de enfoque de género en Comisiones de la verdad.....	38
3.3.1. Incorporación del Enfoque de Género	39
3.3.2. Creación de unidades específicas de género al interior de las comisiones	40
3.3.3. Articulación con el movimiento de mujeres	40
3.3.4. Audiencias y otros mecanismos para visibilizar las violencias específicas contra las mujeres y niñas	41
3.3.5. Visibilización de la violencia sexual contra las mujeres y/o niños y niñas.....	41
4. Enfoque y Marco Conceptual.....	42
5. Estudios de casos de Comisiones de la Verdad: Perú, Paraguay y Colombia	48
5.1. Caso 1. Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú	48
5.1.1. El contexto del conflicto armado en Perú	48
5.1.2 Estructura de la comisión y mandato.....	50
5.1.3 Hallazgos del Enfoque de género en la CVR Perú.....	50
5.1.4 Elementos psicosociales	59
5.2. Caso 2. Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay.....	68
5.2.1. El contexto de la dictadura en Paraguay.....	68
5.2.2 Estructura de la comisión y mandato.....	71
5.2.3 Enfoque de género para considerar el impacto diferenciado de la dictadura en mujeres y niñas	73
5.2.4 Elementos psicosociales	77
5.3. Caso 3. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia	80
5.3.1. El contexto del conflicto armado en Colombia. Orígenes y etapas.	80

5.3.2. Enfoque de género en el Impacto diferenciado y desproporcionado del conflicto armado colombiano en mujeres y niñas	84
5.3.3 Estructura de la comisión y mandato	93
5.3.4 Elementos psicosociales	96
5.3.5 Elementos de género dispuestos en la CEV	97
6. Análisis Transversal	99
7. Conclusiones.....	102
8. Bibliografía.....	106
Anexos.....	119
Anexo 1. Tabla de Unidades Analíticas y Publicaciones consultadas	119
Anexo 2. Consolidado de Comisiones de la Verdad y otras Comisiones de Investigación en el marco de la Justicia Transicional	124

Índice de tablas

1. Tabla. 1 Número de personas víctimas del conflicto armado en Colombia por hechos victimizantes con corte a 1º de abril de 2019	85
2. Tabla. 2 Significados otorgados al cuerpo de las mujeres por los actores armados en los escenarios del conflicto armado colombiano para ejercer sobre ellas violencia sexual	88

Índice de figuras

1. Figura 1. Nube de palabras Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú.....	48
2. Figura 2. Nube de palabras Informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay.	68

Introducción

En escenarios de transición hacia sociedades democráticas pos dictaduras y en aquellas que construyen salidas negociadas a conflictos armados, el papel que juegan las Comisiones de la Verdad es fundamental, en tanto están embestidas de un carácter extrajudicial que sienta las bases para la construcción de verdades y reconocimientos sociales de lo acontecido, lo que a su vez, otorga un carácter político y potencialmente facilitador de la disminución de lo traumático, cuando la recolección, presentación y análisis de los testimonios dan lugar al sentido que tiene para los participantes la búsqueda del reconocimiento de una experiencia, que fue o tal vez sigue siendo traumática. El reconocimiento del impacto diferenciado y desproporcionado que dictaduras y conflictos armados han tenido sobre mujeres y niñas, es un trabajo que empieza a fortalecerse con la denominada segunda escuela de Comisiones de la Verdad. La incorporación del enfoque de género se ha hecho fundamental en coyunturas históricas, en las que organismos internacionales, que lideran procesos de construcción de paz, tienden la mano a iniciativas de mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas cuyas apuestas sociales y políticas se convierten en mecanismos para el reconocimiento de los elementos estructurales que, en términos de violencias de género, subyacen y se exacerban en contextos de guerra.

En esta investigación de tipo documental se exponen los resultados de un proceso de identificación, análisis y contraste de elementos psicosociales y de género tras la revisión de informes y otros documentos producidos por 62 Comisiones de la Verdad en 47 países, que han venido funcionando desde la década de los años setenta y que son representativas de conflictos armados y dictaduras en los cinco continentes. Para ello se han consultado fuentes primarias, tales como los propios informes producidos por estas instancias, y fuentes

secundarias, como artículos académicos que analizan sus perspectivas psicosociales y de género.

Respecto al enfoque de género en Comisiones de la Verdad, se ha encontrado que sus inicios datan de finales de la década de los años noventa, con el informe final de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, pese a que esta orientación no fue concebida explícitamente en su mandato. Será en la primera década del siglo XXI en la que se incrementen los informes con perspectiva de género. Desde el ámbito psicosocial, el testimonio en las audiencias públicas ha sido un dispositivo clave de recuperación liberadora o, por el contrario, de revictimización, en tanto que ha sido mayoritariamente instrumentalizado para dar cuenta de los hechos y, en menor medida, de las experiencias que aportan sentido y contribuyen a la reducción de lo traumático.

1. El tema de la Investigación

En sociedades que se han visto gravemente implicadas y afectadas por sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos y/o graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y que han tenido apuestas para transitar hacia la democracia, bien sea mediante acuerdos negociados ó bien con reformas políticas e institucionales, la implementación de mecanismos alternativos orientados a garantizar el resarcimiento de los daños y la dignidad de los sobrevivientes, así como la prevención de que tales hechos vuelvan a repetirse, tiene un nivel altamente significativo para la construcción de paz.

La Justicia Transicional ofrece un modelo de justicia adaptado a los cambios políticos que emergieron en América Latina y Europa Oriental, donde las sociedades se hallaban en procesos de construcción de paz y/o transiciones hacia sociedades democráticas, tras largos periodos de violaciones a los Derechos Humanos. Comprende cuatro componentes o mecanismos que no se excluyen entre sí: 1. Los procesos penales. 2. Los procesos de

esclarecimiento de verdad. 3. Las reparaciones y 4. Las reformas jurídicas e institucionales (Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2019).

Las comisiones de la verdad se inscriben justamente en los procesos de esclarecimiento de verdad, pues su carácter no judicial permite investigar y esclarecer los crímenes cometidos en el pasado y contribuir, de esta forma, a la garantía del Derecho a la Verdad, entendido como Derecho y recurso efectivo más allá del individuo y su familia, extendiéndose como derecho de las comunidades y de la sociedad en general a saber, para poder comprender las causas y responsables directos e indirectos de los abusos y crímenes cometidos con el propósito final de prevenir que ocurran nuevamente. Es así como ha cobrado importancia la incidencia de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos, derivando en la creación de un número significativo de Comisiones de la Verdad (Hayner, 2006) que resultan accesibles en la medida en que tienen un carácter extrajudicial, lo cual es bien recibido por los perpetradores y por las mismas instancias gubernamentales cuando se negocian las salidas a conflictos armados.

Con frecuencia, son órganos depositarios de las expectativas de las víctimas en lo que a esclarecimiento de verdad se refiere, en tanto se espera que esta sea construida a partir de sus testimonios y revelada a la sociedad en general, como mecanismo oficial de rompimiento de los silencios obligados por los perpetradores.

Estos escenarios pueden o no tener voluntad genuina por parte de los Estados para desenmarañar los estereotipos de género que, a manera de causas estructurales, han sostenido y soportado las violaciones sistemáticas de los derechos de las mujeres, niñas y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas, quienes además se han visto grave y directamente impactadas por los repertorios de violencia específica utilizados por los perpetradores contra ellas. Interesa en este sentido, explorar la trayectoria temporal y espacial

de la categoría de género en las comisiones de la verdad, directamente relacionada con las apuestas y sentidos que los Estados otorgan a las mismas, a través de los equipos que conforman estas instancias, de querer o no develar y dar cuenta de las violencias hacia las mujeres, niñas y personas con identidades de género u orientaciones sexuales no hegemónicas. La autora parte de que se torna requisito fundamental develar estas formas desproporcionadas de violencia sistemática hacia estas poblaciones, tanto para prevenir su repetición como si se quiere construir genuinamente sociedades más justas y equitativas donde se tenga un real acceso al goce efectivo de derechos, lo que a su vez se torna indispensable en la construcción de paz. Tal como afirma Vasuki, (2006, p.7):

Pocas comisiones de la verdad han tratado a fondo el tema de género, en especial el impacto que la violación de derechos humanos ha tenido en la mujer y en las minorías sexuales. De hecho, con frecuencia los grupos de mujeres han criticado a las comisiones de la verdad por no haber observado los efectos significativos de la violencia política basados específicamente en el género. Históricamente, los procesos de las comisiones de la verdad han decepcionado a muchas mujeres. No obstante, otros grupos de mujeres también han reconocido que las comisiones de la verdad ofrecen una oportunidad extraordinaria para traer a la luz violaciones que han sido ignoradas, investigar las condiciones que han facilitado las violaciones basadas en el género, brindar un espacio para las víctimas y los sobrevivientes, sugerir reparaciones que remedien injusticias y dejar un legado a largo plazo que sea receptivo a la historia de las mujeres y a la búsqueda de reformas.

De manera articulada con la consideración anterior, la autora asume que establecer procedimientos cuidadosos de la experiencia psicoemocional que implica rendir testimonio ante las comisiones de la verdad para los sobrevivientes y testigos, puede contribuir a reducir los niveles de daño psicosocial ya causados por las graves violaciones a los Derechos

Humanos y/o las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, en tanto los hechos directos se constituyen en sí mismos, pero no de forma exclusiva, en una fuente de sufrimiento emocional. Es por ello que se torna significativo explorar el lugar que ha tenido, para las comisiones de la verdad u otros mecanismos de investigación transicional en las diferentes etapas de su implementación, el dar cuenta de esta dimensión psicosocial en la experiencia sufrida por los sobrevivientes: durante la recolección de testimonios, en la etapa de análisis y comprensión de la información recolectada y en la producción de los informes de estas instancias. La autora parte de que la inclusión de esta dimensión puede favorecer o fortalecer otro eje de la justicia transicional: las políticas de reparación, estableciendo recomendaciones a los Estados en materia de rehabilitación de los daños psicosociales causados por las graves violaciones a los Derechos Humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

En la actualidad, Colombia se encuentra en pleno proceso de implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el gobierno nacional y la ex guerrilla de las FARC-EP desde noviembre de 2016. Para ello se ha creado una nueva arquitectura institucional que, entre otros aspectos, busca fortalecer los derechos de quienes han sido víctimas y sobrevivientes del conflicto armado y de la violencia política que ha enfrentado el país desde hace más de cinco décadas. Una de las instancias creadas bajo este acuerdo ha sido la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, mediante el Decreto 588 de 2017 (República de Colombia, 2017), la cual, dentro de su mandato estipulado en el Artículo 11, numeral 3, ha contemplado explícitamente el esclarecimiento de los impactos diferenciados del conflicto armado en mujeres, niñas, población LGBTI y en otras minorías. Surge así el interés por reconocer cuál es la práctica y sentidos de las comisiones de la verdad en relación con la consideración de elementos psicosociales y de enfoque de género, para identificar aprendizajes y buenas prácticas que puedan ser

contrastados con el caso colombiano que, desde la puesta en marcha de este mecanismo, ha conformado en su interior equipos encargados de los componentes psicosocial y de género.

LA CEV tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de:

3. El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a personas en razón de su religión, opinión o creencias, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, al pueblo ROM, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas o víctimas del conflicto que se encuentran en el exterior, a los defensores y a las defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros. (pp. 7-8).

Bajo este entendido, se considera relevante analizar los elementos psicosociales y de género que diferentes comisiones de la verdad, en el mundo han implementado dentro de sus procedimientos y contrastarlos a la luz del caso colombiano.

2. Objetivos y proceso seguido para la investigación

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo General

Comprender cuál ha sido la práctica de las Comisiones de la Verdad en relación con la consideración de elementos psicosociales y de enfoque de género.

2.1.2 Objetivos Específicos

1. Identificar y contrastar elementos psicosociales presentes en los procedimientos de recolección de testimonios, análisis y producción de informes de las Comisiones de la Verdad de Perú, Paraguay y Colombia.
2. Identificar y contrastar elementos de enfoque de género presentes en los procedimientos de recolección de testimonios, análisis y producción de informes de las Comisiones de la Verdad de Perú, Paraguay y Colombia.
3. Identificar lecciones aprendidas que puedan servir al cumplimiento del mandato de la actual Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición en Colombia

2.2 Proceso seguido para la investigación.

2.2.1 Perspectiva Metodológica

La perspectiva metodológica que se asume en esta investigación de tipo documental es de corte cualitativo, al pretender documentar lo más ampliamente posible, elementos que puedan dar cuenta de la práctica y sentidos de las comisiones de la verdad, en relación con la consideración de elementos psicosociales y de enfoque de género, para identificar aprendizajes que puedan ser contrastados con el caso colombiano. En este sentido, el paradigma del que se parte, es constructivista, dando lugar a categorías de análisis inductivas a lo largo de todo el proceso de investigación, considerando la influencia de diferentes factores y privilegiando un análisis en profundidad de los tres casos seleccionados (Dalle, Boniolo, Sautu, & Elbert, 2005), entre un corpus de 62 comisiones de la verdad y comisiones de investigación que se han instalado en 47 países desde los inicios de estos mecanismos en la década de los años 70 hasta el año 2018 cuando inició su mandato en Colombia, la actual

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia.

2.2.2 Método

La búsqueda bibliográfica a partir de descriptores específicos relacionados con el tema de investigación fue el punto de partida para documentar ampliamente el corpus de 62 comisiones que reflejan el estado de la cuestión de esta investigación, Las unidades y criterios de análisis nos permitieron seleccionar tres casos relevantes para los propósitos de este estudio, entre comisiones de la verdad creadas entre los años 2001 y 2018, para proceder primero al estudio longitudinal y en profundidad de cada caso y, posteriormente, a un análisis transversal de triangulación y contraste entre los mismo.

Los descriptores de búsqueda y organización de la literatura, utilizados también como unidades analíticas fueron:

1. Comisiones de la verdad
2. Elementos psicosociales
3. Enfoque de Género en comisiones de la verdad
4. Memoria y verdad
5. Testimonio
6. Informes de comisiones de la verdad

Bajo estos descriptores, se procedió a la búsqueda de literatura en las Bases de Datos con las que la Universidad de Cádiz tiene convenios de acceso: Web of Science, Scopus, Dialnet, Redalyc, Google Académico, Ebsco Host, Statista, Eric, PsycArticles, PsycInfo. La búsqueda se fortaleció desde agosto hasta octubre de 2019, con el acceso a la biblioteca digital de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en el marco de la estancia de

investigación que realizó la autora para profundizar en este TFM. De igual manera se consultó información de otras fuentes, tales como sitios web de Naciones Unidas, Organizaciones No Gubernamentales, centros de investigación en el campo de la Justicia Transicional y los DDHH, y otros centros de investigación de entidades Estatales.

A partir de la búsqueda de literatura bajo los descriptores mencionados anteriormente, se cuenta con un número significativo de publicaciones organizados bajo dichas denominaciones, los cuales se presentan en el anexo 1.

2.2.3 Técnicas de producción de datos

Se utilizó sistemáticamente el análisis de documentos producidos a manera de informes oficiales por las Comisiones de la Verdad referidos tanto al estado de la cuestión como de los tres casos analizados en profundidad. De igual manera, se revisaron artículos académicos que se han escrito a partir de estos informes oficiales o a manera de reflexiones sobre la implementación misma de estas instancias de justicia transicional.

2.2.4 Selección de casos

El tipo de selección de casos para el análisis en profundidad fue intencional en función de criterios explícitos: Al tener un corpus de 62 casos en el estado de la cuestión se identificaron criterios que en línea con los objetivos de la investigación permitieran un análisis en profundidad que sirviera para identificar prácticas de incorporación de elementos psicosociales y de enfoque de género que sirvan al caso de la Comisión de la Verdad de Colombia. Estos criterios fueron:

1. Celebración de audiencias públicas a cargo de las comisiones de la verdad
2. Enfoque de género para el análisis y comprensión de los impactos diferenciados contra mujeres y niñas

3. Disposición de equipos psicosociales para la atención y contención emocional durante la participación en las comisiones de la verdad
4. Presencia de elementos psicosociales en sus procedimientos de análisis para la elaboración de informes finales
5. Recomendaciones de rehabilitación del daño psicosocial producido por los hechos de violencia

Si bien en el estado de la cuestión se presentan algunos elementos analíticos de los 62 casos de comisiones de la verdad identificados en los 5 continentes y se exponen los principales elementos psicosociales y de género de aquellas comisiones de la verdad que han incorporado dichos elementos, al cruzar los criterios anteriormente expuestos, se determinó para efecto de análisis comparativo, la selección de dos casos adicionales al caso colombiano; estos fueron el caso de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú y la Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay, por ser casos que cumplen al ciento por ciento con los 5 criterios de interés analítico que se presentaron anteriormente.

2.2.5 Estrategia de Análisis

Partiendo de las categorías inductivas que arrojó la revisión del estado actual, y a partir de los criterios para la selección de los 3 casos citados en el apartado anterior, se presentarán dos tipos de análisis para estos. En primer lugar, un análisis longitudinal para Perú, Paraguay y Colombia y, en segundo, un análisis transversal con el fin de poder comparar las similitudes y diferencias desde los enfoques psicosocial y de género que permitan la identificación de buenas prácticas que puedan servir al caso colombiano que se constituye en el único que en la actualidad está en proceso de implementación de su comisión de la verdad.

3. Estado de la cuestión

Esta investigación ha hallado a la fecha un corpus de 62 mecanismos de esclarecimiento de Verdad tales como Comisiones de la Verdad y Comisiones de Investigación, creados en 47 países, en los cinco continentes, entre 1974 y 2018, en los que se indagará la presencia o ausencia de elementos psicosociales y de género. América ha tenido 25 comisiones de verdad y de investigación entre 1979 y 2018. África ha tenido 22 entre 1974 y 2014. Asia ha tenido 10 comisiones entre 1990 y 2010. Europa ha tenido 3 comisiones de la verdad entre 1992 y 2002. Finalmente, Oceanía ha tenido 2 comisiones entre 2005 y 2008.

La información se ha organizado en tres partes. La primera ofrece un recuento histórico de las comisiones de la verdad y otros mecanismos de esclarecimiento, organizado en cinco periodos de tiempo, en los que se analizan los contextos que enmarcaron su creación. La segunda, da cuenta de las principales consideraciones psicosociales que tuvieron algunas comisiones de la verdad y finalmente en la tercera parte, se presentan algunos elementos del enfoque de género que se han ido identificando.

3.1. Contexto y línea de tiempo de las Comisiones de la Verdad y otros mecanismos de investigación documentados

Se presenta aquí un recuento histórico y contextual de 62 comisiones de la verdad y otros mecanismos de investigación, organizado en cinco periodos de tiempo, a partir de los elementos de contexto que dieron origen a su creación.

3.1.1. Primer periodo 1974 a 1995: 21 comisiones

Durante este periodo, el continente africano tuvo 8 comisiones de la verdad. En Uganda se creó la primera comisión de la verdad en el mundo, en 1974. Le siguieron

Zimbabwe en 1985, Chad en 1990, Etiopía en 1993, Malawi en 1994, Burundi, Sudáfrica y nuevamente Uganda en 1995. Todas fueron creadas tras regímenes dictatoriales y conflictos interétnicos, con excepción de Sudáfrica cuyo contexto de creación fue el Apartheid (Hayner, 2008).

En América se constituyeron 7 comisiones de la verdad en este periodo. Aunque es común atribuirle la primera a Bolivia, en cuyo caso se estableció en 1982, se tiene información de que en 1979 se creó en Brasil la Comisión no oficial de Investigación la cual investigó, mediante documentos oficiales, los procesos judiciales contra activistas y opositores presentando su informe en 1986, titulado “Brasil Nunca Mais. El Derecho a la memoria y la Verdad” (Commission of Inquiry: Brazil: No More (Brasil: Nunca Mais), 1979). Posteriormente se constituyó en 1983, CONADEP en Argentina, a la que siguió Uruguay con su primera comisión en 1985, Chile en 1990 también con su primera Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de Chile, 1996), Salvador en 1992 y, finalmente Haití en 1995. Todas fueron creadas tras dictaduras, con excepción de El Salvador, que tuvo como origen, los acuerdos de paz negociados con el apoyo de ONU y firmados en 1992 (Hayner, 2008).

En el continente asiático funcionaron 4 comisiones: la primera en Nepal en 1990, como producto de la presión social ejercida por el pueblo que reclamaba al rey el regreso del sistema multipartidista tras la instalación de una monarquía autocrática sin partidos. Las 3 restantes se establecieron como forma de operativización territorial en Sri Lanka en 1994 en el marco de la guerra civil y el conflicto interétnico entre gobierno y población Tamil. Finalmente para el caso europeo, Alemania tuvo 2 comisiones de investigación sobre las consecuencias de la dictadura del Partido Socialista Unificado de Alemania. La primera se creó en 1992 y la segunda en 1995 (Truth Commission Digital Collection, 2011).

3.1.2. Segundo periodo 1996 a 2000: 7 comisiones

En América se constituyeron 3 comisiones. Ecuador creó su primera Comisión de la Verdad y la Justicia en 1996, para investigar los patrones de violaciones a los Derechos Humanos que se incrementaron desde 1979 en el periodo de tránsito hacia el restablecimiento de la democracia, tránsito este, en el que se crearon grupos paramilitares financiados por algunos terratenientes del Ecuador como uno de los mecanismos para acallar las voces de campesinos y agricultores que se resistían a las regulaciones sobre el uso de la tierra y eran señalados de guerrilleros. Guatemala creó su Comisión para el Esclarecimiento Histórico en 1997, en el marco de los acuerdos de paz que pusieron fin al conflicto armado de más de 30 años, en el que las estrategias contrainsurgentes utilizadas por el gobierno y sus fuerzas del orden cometieron sistemáticas violaciones graves a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999). Uruguay tuvo una segunda comisión, que para este periodo fue denominada Comisión para la Paz, establecida en el año 2000, con el fin de continuar esclareciendo los hechos de la dictadura que se presentaron entre 1973 y 1985 (Truth Commission Digital Collection, 2011).

En igual número, África constituyó también 3 comisiones. Nigeria conformó su Comisión de Investigación de Violaciones de los Derechos Humanos, conocida también como Oputa Commission, en 1999 para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura de 1984 a 1999; Ruanda tuvo en el mismo año la Comisión de la Unidad Nacional y la Reconciliación –CNUR-, que se creó producto de los acuerdos de paz conocidos como Arusha desde 1993 para investigar el genocidio Tutsi cometido en la primavera de 1994 y, finalmente, Costa de Marfil creó una Comisión Nacional de Investigación en el año 2000 para investigar los crímenes cometidos en Abidjan en octubre de ese año, tras la dictadura militar que se originó desde diciembre de 1999 (Truth Commission Digital Collection, 2011).

En el continente asiático, Corea del Sur constituyó en el año 2000 su primera de dos comisiones, titulada Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de muertes acaecidas en circunstancias sospechosas entre 1975 y 1987, cuando el apoyo a gobiernos democráticos se convirtió en objeto de violencia como mecanismo sistemático de represión como rezago de los regímenes dictatoriales (Truth Commission Digital Collection, 2011).

3.1.3. Tercer periodo 2001 a 2004: 14 comisiones

Las 14 comisiones que se agrupan como comisiones de tercer periodo, están representadas por países de África donde funcionaron 6 comisiones, América con 5, Asia con 2 y Europa oriental con 1. En este orden, Sierra Leona inició el periodo, creando su Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2002 para esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos tras el conflicto armado que experimentó entre 1991 y 2000 (Hayner, 2008). En ese mismo año, Ghana también conformó la suya, para identificar las violaciones y abusos a los derechos humanos cometidos por gobiernos inconstitucionales entre 1957 y 1993 (Truth Commission: Ghana, 2011).

Siguieron Argelia en 2003, donde se creó una comisión de investigación tipo Ad Hoc sobre las desapariciones ocurridas entre 1992 y 1999 a cargo de las fuerzas de seguridad de Argelia contra las milicias islamistas, que conllevó la desaparición de personas acusadas de apoyarles (Commission of Inquiry: Algeria, 2011). En el año 2002, se creó en la República Democrática del Congo el Acuerdo de Paz Sun City que enmarcó la posterior creación en 2003, tras largos periodos de dictaduras y conflictos interétnicos, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Truth Commission: Democratic Republic of Congo, 2011).

En 2004, Marruecos creó la Comisión de Equidad y Reconciliación para investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas tras la independencia entre 1956 y 1999, contra manifestantes que se oponían a las reformas del Rey Mohamed V y posteriormente de

su hijo Hassan II que lo relevó tras su muerte desde 1965 (Truth Commission: Morocco, 2011). En el año 2004 se constituye en Burundi la segunda comisión internacional de investigación, tras los acuerdos de paz de Arusha firmados en el 2000 (Centro Internacional para la Justicia Transicional y Fundación Kofi Annan, 2015).

En el continente americano, durante el año 2001, Panamá y Perú conformaron sus comisiones de la verdad, transitando hacia gobiernos democráticos después de haber tenido dictaduras y gobiernos autoritarios respectivamente. En el caso peruano, específicamente se dilucidaron elementos relacionados con el conflicto armado sostenido entre 1980 y 2000 (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003a). También en Granada se conformó en el año 2001 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Amnistía Internacional, 2010).

Seguidamente, Chile estableció en 2003 su segunda comisión, esta vez, orientada al esclarecimiento de los detenidos políticos y las prácticas de tortura durante la dictadura de Pinochet (Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004). En el año 2004, Paraguay constituyó su Comisión de Verdad y Justicia para esclarecer las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales durante la dictadura de Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989 (Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008a).

En Asia, Timor del Este creó su Comisión para la Recepción, la Verdad y la Reconciliación en 2002, para esclarecer los hechos acontecidos durante la ocupación de Indonesia en Timor entre los años 1979 y 1999 (Truth Commission: Timor-Leste, 2002).

Por su parte Indonesia creó en 2004 la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la cual fue cuestionada tanto por Naciones Unidas como por su propio Tribunal Constitucional en la medida en que su estatuto la facultaba para conceder amnistías frente a delitos graves (Hayner, 2008). Finalmente, en representación de Europa, para la época, la República

Federativa de Yugoslavia, creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el año 2002 con el fin de investigar los conflictos internos y políticos que ocurrieron entre 1980 y 2000 (Truth Commission: Serbia and Montenegro, 2002).

3.1.4. Cuarto periodo 2005 a 2010: 12 comisiones

Cuatro países africanos conformaron comisiones de la verdad en este periodo. Liberia en el 2006, estableció su Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el marco del Acuerdo general de paz de 2003, para investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1979 y 2003. Kenia en 2009, estableció su Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación para investigar las violaciones a los Derechos Humanos cometidas luego de décadas de políticas represivas entre 1963 y 2008 (Truth Commission: Kenya, 2009).

Togo en el año 2009 estableció su Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación para investigar por los hechos de violencia política y abusos cometidos entre 1958 y 2005 tras la dictadura posterior a la independencia como colonia francesa (La comisión "Verdad, Justicia y Reconciliación de Togo", 2009). Finalmente, la República de Mauricio en el 2009 encomienda a su Comisión de la Verdad y la Justicia esclarecer una investigación sobre el periodo de esclavitud desde la colonización de la isla en 1638, para identificar los abusos socioeconómicos en un periodo de 370 años (Truth Commission: Mauritius, 2012).

Un número igual de países crearon durante este periodo comisiones de la verdad en América. En el año 2005, Colombia conformó una comisión para esclarecer específicamente los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en noviembre de 1985, a manos del Ejército Nacional, como respuesta a la toma que había realizado a esta institución el movimiento guerrillero M-19 (Gómez, Herrera, & Pinilla, 2010). Canadá estableció su Comisión de la Verdad y Reconciliación de las Escuelas Residenciales Indígenas en el año 2006 para

investigar los crímenes políticos y las graves violaciones a los Derechos Humanos, así como los patrones de hechos inhumanos dirigidos contra los niños indígenas en los colegios estatales (Hayner, 2008).

Ecuador, creó una segunda Comisión de la Verdad para Impedir la Impunidad en el año 2007 y estuvo encargada de investigar los abusos cometidos en el periodo comprendido entre los años 1984 y 2008 (Comisión de la Verdad de Ecuador, 2010). Honduras en el 2010 creó su Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de establecer un informe acerca de los hechos relacionados con el golpe del 28 de junio de 2009 contra el entonces presidente Zelaya (Truth Commission: Honduras, 2012). En Asia, Corea del Sur, conformó su segunda Comisión de la Verdad en el 2005 para esclarecer los incidentes relacionados con abusos y violaciones a los Derechos Humanos desde el periodo del dominio japonés, situado aproximadamente hacia principios del siglo XX y hasta la caída de los regímenes dictatoriales anticomunistas a finales del mismo siglo (Truth Commission: South Korea 2005, 2012). Tailandia creó su primera Comisión de la Verdad en el año 2010, tras el golpe militar del 2006 y los subsiguientes años de violencia política (Centro Internacional para la Justicia Transicional y Fundación Kofi Annan, 2015).

Finalmente, se resalta que, durante este cuarto periodo, desde el continente oceánico, la República de Fiji y las Islas Salomón, incursionaron con el mecanismo transicional de comisiones de la verdad. Es así como en el año 2005, Fiji constituyó su Comisión de la Verdad, Ley y Orden (Ibáñez, 2014). En el año 2009, las Islas Salomón establecieron su Comisión de la Verdad y la Reconciliación para esclarecer los hechos relacionados con las violaciones y abusos a los Derechos Humanos cometidos en el marco de la guerra civil que se generó entre 1998 y 2003 (Truth Commission: Solomon Islands, 2009).

3.1.5. Quinto periodo 2011 a 2018: 8 comisiones

Este es el periodo más reciente de las comisiones de la verdad. América, África y Asia, han tenido países con este mecanismo. La lista la encabeza América con 6 comisiones. Así, Brasil, quien había tenido una comisión de investigación como iniciativa de la sociedad civil pero sin un respaldo oficial, conformó su Comisión de la Verdad oficialmente respaldada por una Ley en el año 2011, para esclarecer las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la dictadura de 1946 y 1988 (Díaz & Molina, 2016). Venezuela ha tenido dos comisiones de la verdad; la primera creada en 2011 (Ibáñez, 2014) y la segunda en 2017, para esclarecer los hechos de violencia política que se han generado desde 1999 cuando Hugo Chávez asumió el poder.

Colombia, ha tenido en este periodo 3 mecanismos de esclarecimiento de verdad. El primero, como iniciativa del movimiento de mujeres víctimas del conflicto armado, a través de una plataforma denominada Ruta Pacífica de las Mujeres, que en 2013 presentó su informe titulado “La Verdad de las Mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia” (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013). Ahora bien, en el marco de las negociaciones de la Habana entre el gobierno nacional y la ex guerrilla de las FARC-EP en el año 2014, se conformó la Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas (Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, 2015) y, finalmente tras la firma del acuerdo final suscrito entre estas partes, en el año 2016, se estableció que se crearía la Comisión de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la cual fue establecida mediante decreto 577 del 2017 y entró en vigor el año 2018 (República de Colombia, 2017). Por su parte, África ha tenido una comisión.

En Malí, a principios del 2014, fue sustituida la Comisión del Diálogo y la Reconciliación por la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reconciliación (Castilla, 2015). Nepal, desde el continente asiático, conformó en el 2014 su segunda comisión de

investigación sobre personas desaparecidas (Centro Internacional para la Justicia Transicional y Fundación Kofi Annan, 2015).

3.2. Hallazgos psicosociales

De las 62 comisiones de la Verdad y otros tipos de comisiones de investigación en el campo de la Justicia transicional que conforman el corpus de esta investigación, se tiene que 11 han tenido consideraciones de elementos psicosociales y/o psicológicos, los cuales se han agrupado en cuatro subcategorías que dan cuenta de: 1. La disposición de equipos para el acompañamiento psicosocial o la contención emocional de las víctimas, durante la recolección de testimonios. 2. La consideración ampliada o específica en sus informes, de que las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario han derivado en daños psicológicos y psicosociales. 3. El lugar y mecanismos que ha tenido el testimonio y sus efectos y, 4. La elaboración de recomendaciones a los Estados, de medidas de Rehabilitación de los daños psicológicos y psicosociales en el marco de Programas que propenden por el Derecho a la Reparación. Las 11 comisiones que han tenido uno o más de estos elementos psicosociales fueron creadas en la década de los años 90 y son:

1. Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación de Chile de 1990
2. Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica de 1995
3. Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala de 1997
4. Comisión Nacional de la Unidad y la Reconciliación de Ruanda de 1999
5. Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú de 2001
6. Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona de 2002
7. Comisión sobre tortura y prisión política de Chile de 2003
8. Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay de 2004

9. Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia de 2006

10. Comisión de la Verdad del Ecuador, 2007

11. Comisión de las Mujeres de Colombia en 2013

12. Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia de 2018

En el apartado que continúa como parte del presente capítulo, se presenta un recuento de estos elementos psicosociales en 8 comisiones pues para los casos de las comisiones de la verdad de Perú, Paraguay y Colombia, estos serán analizados en el capítulo 5 de manera longitudinal y en el capítulo 6 de manera transversal en las comisiones de la verdad de Perú, Paraguay y Colombia¹.

3.2.1. Acompañamiento psicosocial

Esta categoría refiere aquellas comisiones que dispusieron equipos para contener los impactos socioemocionales derivados del acto mismo de la participación en estas instancias al rendir testimonio privado o mediante audiencias públicas.

El informe de la CVR de Sudáfrica refiere que dispusieron de personal a cargo de tomar las declaraciones, con capacidad de hablar la lengua propia de las regiones donde realizaban su trabajo, de tal forma que las víctimas pudieran dar el testimonio en su propia lengua. También, brindaron capacitación a este personal, para que pudieran ofrecer contención emocional a las personas a quienes les resultó difícil presentar su declaración y derivar a los servicios de salud mental a quienes requerían asistencia profesional. No obstante, reconoce que en muchos casos no se desarrolló una coordinación adecuada con

¹ Estas comisiones han sido seleccionadas por cumplir con la totalidad de criterios de interés analítico de la investigadora: elementos psicosociales, enfoque de género y celebración de audiencias públicas como uno de los mecanismos de recolección de testimonios y de acceso público al proceso mismo de reconstrucción de verdades históricas.

aquellas que a nivel local podían haber brindado los servicios y por ello y por no haber brindado seguimiento adecuado frente al acceso a servicios de salud mental, a quienes habían testificado y los requerían (Truth and Reconciliation Commission, 1998).

En Ruanda, a través del proceso de Unidad y Reconciliación Nacional, se ha reconocido que tanto las personas pertenecientes a la etnia Tutsi muchos de sus parientes y allegados, sufrieron traumas severos, lesiones físicas, emocionales y psicológicas graves, particularmente por la exposición al genocidio Tutsi en 1994. Así se explicita que los procesos de recuperación de estos traumas, requieren un enfoque integral y profundo que de cuenta de las causas estructurales, así como también facilite experiencia personal del conflicto violento. La comisión trabajó para que las nociones de identidad y solidaridad permearan los vínculos entre los Ruandeses, durante la transición pos genocidio (Republic of Rwanda. National Unity and Reconciliation Commission, 2016). Dentro de los mecanismos utilizados en el proceso de Unidad Nacional y Reconciliación, la comisión se asesoró para que los excombatientes con discapacidad pudieran regresar a la vida civil, disminuyendo el trauma físico y psicológico al que se vieron expuestos durante la guerra con el fin de facilitar su inserción en la vida social aprendiendo a resolver conflictos sociales por vías no violentas. En consecuencia, las estrategias de justicia incluyeron programas pedagógicos dirigidos a los prisioneros excombatientes que facilitaran una mentalidad y comportamientos basados en el respeto por los Derechos Humanos y la convivencia pacífica, la reconciliación y la preparación para la reinserción en la vida social, brindándoles servicios psicosociales y de consejería psicológica (Republic of Rwanda. National Unity and Reconciliation Commission, 2016).

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona, visitó entre septiembre y noviembre de 2002, los 12 distritos y área occidental para que las personas que vivían fuera de Freetown pudieran participar e interactuar directamente con los comisionados.

En las visitas, la comisión buscó el apoyo con los locales, en lo concerniente a toma de declaraciones, celebración de audiencias, acompañamiento por parte de consejeros, intérpretes, sanadores y acompañantes psicosociales y en salud mental. Las personas que colaboraron en estos aspectos, recibieron formación en los métodos y procedimientos de la comisión, aspectos de la reparación y confidencialidad. Es así como la comisión se articuló y trabajó en estrecha relación con organizaciones locales que durante el conflicto habían brindado acompañamiento psicosocial a mujeres y niños y quienes, además, habían documentado sus casos. Es de destacar que esta comisión fue cuidadosa con la experiencia de niños y niñas y de las mujeres. Para ello organizó audiencias confidenciales en articulación con UNICEF y otras agencias que velan por los derechos de los niños, en las que recibió y documentó los testimonios de los niños y niñas, así como aquellos testimonios específicos sobre de violencia sexual, capacitando previamente al personal en la recopilación de testimonios de mujeres y favoreciendo una sensibilidad hacia el enfoque de género y brindando acompañamiento psicosocial durante la participación en dichas audiencias. La comisión previó la disposición misma del lugar en que se recibían las audiencias para hacerlo cuidadoso a quienes rendían el testimonio (Sierra Leone Truth & Reconciliation Commission, 2004).

En Chile, la Comisión sobre Tortura y prisión política, dispuso de equipos para que brindaran atención psicológica y contención emocional en el proceso de rendición de testimonios que tuvo un carácter privado, en razón a la profundidad de los delitos.

Marruecos también dispuso de equipos para que brindaran contención emocional a los testimoniantes, durante el proceso de documentación de casos.

En Liberia, en el año 2006, se capacitó a más de 300 personas que hicieron parte de la Comisión de la Verdad, entre los que había personas a cargo de brindar soporte psicosocial a declarantes. Con 120 tomadores de declaraciones, la comisión desarrolló una capacitación de

3 días para que desarrollaran habilidades y capacidades en el abordaje de la re-experimentación de experiencias traumáticas y acompañamiento en situaciones de duelo. La comisión contó con una unidad psicosocial bajo el sentido de que la curación de los impactos psicosociales tras largos periodos de conflicto, es necesaria y fundamental para la reconciliación nacional. Esta unidad tenía como objetivo dignificar a los sobrevivientes y facilitarles mecanismos de afrontamiento adecuados para encontrar sentido y esperanza hacia el futuro. Así, constituyó un Comité Técnico conformado por integrantes estatales y no estatales, que se encargó de elaborar un manual para capacitar a los asesores que serían empleados. El manual también incluía recomendaciones para el manejo del estrés en personal y comisionados. No obstante debido a falta de fondos presupuestales, estas acciones se vieron limitadas, sin embargo, durante el tiempo que duró la toma de declaraciones, 15 funcionarios recibieron 25 sesiones de atención pues mostraban síntomas de traumatización secundaria (Republic of Liberia. Truth and Reconciliation Commission, 2008).

La Comisión de la Verdad de Ecuador del 2007, conformó un equipo multidisciplinario entre los que había psicólogos quienes además de considerar desde una perspectiva psicosocial la dimensión del sufrimiento generado por las violaciones de los Derechos Humanos y plantear recomendaciones en clave de reparación a estos daños psicosociales, brindaron contención emocional a las víctimas, cuidando que su experiencia fuera recogida de forma cuidadosa y digna (Comisión de la Verdad de Ecuador, 2010).

La investigación que dio lugar al informe de la Comisión de las Mujeres en Colombia en el año 2013, adoptó una metodología con un profundo rigor ético, político, fundamentada en una postura feminista que incluyó estrategias de acompañamiento psicosocial durante y con posterioridad a la recolección de los testimonios de las mujeres, que activaron mecanismos de escucha y empatía (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013).

3.2.2. Informes de comisiones de la verdad con análisis específico de daños psicosociales y/o psicológico

El informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile de 1990, da cuenta de prácticas de tortura psicológica que fueron cometidas contra detenidos políticos durante los interrogatorios propios de la dictadura chilena. En estos interrogatorios, la tortura psicológica, fue utilizada cuando después de torturar con otros métodos, estos no lograban su cometido. Algunos métodos propios de tortura psicológica consistieron en torturar o vejear sexualmente delante del detenido a algún pariente suyo que no estaba involucrado en la militancia política o amenazar al detenido con estas posibilidades (Chile. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación , 1991). El informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en Chile refiere en uno de sus apartados, efectos psicológicos descritos por los testimoniantes, tales como sentimientos de inseguridad, temor, humillación, vergüenza y culpa, así como estados depresivos, angustiantes y pensamientos de desesperanza. Los efectos han sido analizados en los niveles individual, familiar y comunitario. Abarca un análisis específico de la tortura como experiencia traumática, incluyéndose como forma de tortura la violencia sexual (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004).

La Comisión para el Esclarecimiento del Conflicto en Guatemala, consideró en su informe las consecuencias psicológicas de la violencia en la población en general y los efectos psicosociales de esta en la niñez. De igual forma se utiliza el campo psicosocial como elemento de análisis para comprender las estrategias utilizadas por la doctrina de seguridad nacional y militar del gobierno, al querer instaurar ideologías nacionalistas que permearan hasta las áreas rurales como doctrina opuesta al comunismo internacional en los inicios de los años 80. El equipo de la Comisión consideró los principales daños e impactos psicosociales generados por la violencia sexual como aislamiento, dificultades para constituir relaciones

afectivas y de pareja, instalación de climas de terror entre la población. El análisis con enfoque psicosocial de los testimonios de las víctimas ayudó a comprender el sentido de las experiencias vividas, así como la desestructuración del tejido social (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1999).

En Sierra Leona, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación ha reconocido la particular afectación en niños y niñas que fueron víctimas del conflicto armado en Sierra Leona por habérseles negado su infancia y vulnerar sus derechos a la salud y educación, la desintegración de sus familias, lo cual genera impactos directos sobre el sistema familiar y comunitario ya que estos niños se han visto expuestos directamente al rechazo de sus familias y comunidades por su participación y filiaciones con uno u otro actor armado. Particularmente las niñas fueron objeto de esclavitud sexual y ello ha acarreado estigmatización, rechazo y burla por parte de las comunidades. En términos de recomendaciones frente a las reparaciones y ante las limitaciones del presupuesto y recursos estatales, la comisión recomendó una serie de criterios de priorización, asociados con poblaciones y delitos de los que fueron víctimas. Así, los niños y niñas víctimas de reclutamiento forzoso, violencia sexual, separados de sus padres o nacidos propiamente de la violencia sexual y con afectaciones psicosociales, las viudas de la guerra y víctimas de amputaciones y otros heridos de guerra, deberían encabezar la lista de los priorizados. Por otra parte la comisión reconoce los daños psicológicos a los que se vieron expuestos cautivos y aldeanos por todas las facciones combatientes al ser obligados al canibalismo forzado y al consumo de drogas. Así, recomendó medidas específicas de rehabilitación de daños físicos, psicológicos y psicosociales (Sierra Leone Truth & Reconciliation Commission, 2004).

El informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia, presenta un capítulo específico en el que se describen las necesidades e impactos del conflicto armado en las personas mayormente vulnerables (niños, personas con discapacidad y mujeres). No

obstante, refiere como una gran barrera el que el plan quinquenal de salud posterior al conflicto que fue desarrollado por el Ministerio de Salud, no incluía componente específico para el desarrollo de la salud mental (Republic of Liberia. Truth and Reconciliation Commission, 2008).

Ecuador tuvo, durante la elaboración del informe de la Comisión de la Verdad en 2007, una clara perspectiva psicosocial intencionada hacia la comprensión del sufrimiento de las víctimas y con ello poder configurar de manera pertinente, necesidades de reparación. Para ello, establecieron la comprensión del impacto psicosocial en dos momentos: el primero, el generado directamente por la comisión de los hechos de violencia y, el segundo, por cuestiones asociadas a impunidad en la aplicación de mecanismos de justicia, así como desconfianza hacia las instituciones estatales. El informe documenta los efectos traumáticos de las formas de violencia sexual ejercidas contra hombres y mujeres en las que destaca las dificultades para el ejercicio funcional de la sexualidad y/o afectividad, su capacidad para experimentar o brindar placer, efectos que seguían vigentes al momento de la recolección de los testimonios con las víctimas (Comisión de la Verdad de Ecuador, 2010).

El informe de la Comisión de la Verdad de las Mujeres en Colombia en el año 2013, explicita que los hechos de violencia perpetrados contra las mujeres o sus familiares, en el marco del conflicto armado, han derivado en graves afectaciones a la salud física, mental y psicosocial. Cinco de cada diez mujeres que dieron testimonio, relataron haber presentado consecuencias graves en su salud (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013). De igual manera el informe refiere que la no garantía de la atención psicosocial requerida contribuye a romper la capacidad de las mujeres para restaurar su vida desde la cotidianidad.

3.2.3. Consideraciones psicosociales del testimonio

Si bien las víctimas directas de la violencia en Chile, que participaron en el estudio para analizar los impactos de su participación en las comisiones de la verdad, calificaron más alto en emociones como tristeza, dolor, culpa, ira, miedo y vergüenza en comparación con las indirectas y las no afectadas, también son quienes mejor puntuaron en esperanza, alegría y orgullo por haber participado en estas instancias. La valoración positiva de haber implementado comisiones en Chile, se ubica en el nivel social, en la medida en que ha permitido develar las graves violaciones que se cometieron en el pasado, disponer de otros mecanismos para fortalecer procesos sociales y organizativos de exigibilidad frente a la aplicación de justicia. Ahora bien, ello no necesariamente se traduce en un bienestar a nivel individual para las víctimas directas (Cárdenas, Páez, & Rimé, 2013).

Para el caso de Sudáfrica, autores reconocidos en el campo de la investigación psicosocial (Beristáin, Páez, Rimé, & Kanyangara, 2010), han identificado a través de los argumentos tras estudios de varios autores que la CVR generó mayores impactos positivos psicosociales en el nivel social, pero no se observó lo mismo en el nivel individual de personas que participaron rindiendo testimonio. Es decir, se contempla que la participación como testificante puede tener tanto efectos positivos como negativos en el nivel individual, al evocarse emociones del pasado que por su carácter doloroso pueden activar una nueva experiencia traumática. A ello se le suman las tensiones por amnistías a los victimarios, que generaron malestar emocional en algunas víctimas. Así, algunos estudios citados por los autores concluyen que no hubo variación significativa en cuanto a tasas de depresión, trastornos de estrés postraumático, ni trastornos de ansiedad entre quienes participaron rindiendo testimonio en audiencias públicas, privadas, o entre quienes no participaron.

Por su parte Molly Andrews (2007), comenta que muchas de las personas que dieron testimonio en la CVR de Sudáfrica, lo hicieron no pensando en que por ello se curarían, sino

con la esperanza de encontrar mayor información acerca de lo vivido por sus seres queridos, dándole un valor a la narración en la medida en que ayuda a organizar la experiencia, pero no por ello es una analogía como tal de esta. Adicionalmente sintieron que haber participado brindando un testimonio no les ayudó psicológicamente. Explica esta percepción a partir de la estructura rígida de los formatos de información utilizados por la CVR para recoger el testimonio, que no recogía el contexto de los hechos ni la experiencia en sí misma, pues esta era reducida a datos. El protocolo de declaración para recoger estos testimonios tuvo 8 versiones, reduciendo a la mínima expresión el espacio para que la víctima narrara su experiencia, forzando el vocabulario a las estructuras de las verdades que la comisión necesitaba contar.

3.2.4. Informes de comisiones de la verdad que presentaron recomendaciones para la reparación del daño psicosocial y/o psicológico

Comisiones como Chile en 1990, Guatemala 1997, Perú, Chile en 2003, Paraguay, ordenaron medidas de Rehabilitación y Reparación psicosocial por las consecuencias psicosociales de las graves violaciones a los Derechos Humanos.

En su informe final, la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Chile de 1990, presentó recomendaciones relativas a la salud física y mental de las víctimas directas y sus familiares, considerando que la salud de las personas expuestas a la violencia de la dictadura, presentaba particularidades que requerían una atención especializada por lo que recomendó al Ministerio de Salud que en articulación con organismos de cooperación no estatales que ya tenían amplia experiencia de atención psicológica con las víctimas, formularan los programas de atención en salud con enfoque interdisciplinario de tal forma que pudiesen considerar las afectaciones biológicas, psicológicas y sociales que los hechos de violencia habían generado entre víctimas y familiares (Chile. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991).

Trece años después, la Comisión sobre la Prisión Política y la Tortura presentó en su informe, recomendaciones de reparación a nivel individual, relacionadas con la salud física y psicológica de las víctimas, para lo que recomendó la asignación de fondos al Programa de Reparación y Atención en Salud PRAIS, que se había creado con posterioridad a la primera comisión, de tal forma que se garantizara la atención que las víctimas requerían. Así mismo, formuló recomendaciones para implementar medidas de reparación simbólicas a nivel colectivo, tendentes a la reparación del daño moral y al restablecimiento de la dignidad de las víctimas (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004).

Las Comisiones de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, la Instancia de Equidad de Marruecos y la Comisión de la Verdad del Ecuador ordenaron medidas de Rehabilitación de los daños psicosociales tras haber analizado desde este ámbito la profundidad de las secuelas causadas por la violencia.

La Comisión de la Verdad de las Mujeres en Colombia, recomendó al Estado Colombiano, brindar acciones integrales de atención en salud y atención psicosocial como medida de rehabilitación en el marco de su derecho a la Reparación, en tanto las mujeres entrevistadas refieren que existen daños que son irreparables y cuya indemnización económica no compensará en ningún nivel el sufrimiento causado (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013).

3.3. Elementos de enfoque de género en Comisiones de la verdad

Se presentan a continuación hallazgos en materia de enfoque de género en el corpus examinado, organizados en cinco subcategorías: 1. Incorporación del Enfoque de Género en los equipos de trabajo. 2. Creación de unidades específicas de género al interior de las comisiones. 3. Articulación con el movimiento de mujeres. 4. Celebración de audiencias para visibilizar las violencias específicas hacia las mujeres. 5. Visibilización de la violencia sexual

en los informes de las comisiones. Es posible observar que algunas comisiones han tenido todos los cinco elementos identificados y otras al menos uno o más.

3.3.1. Incorporación del Enfoque de Género

Haití en su Comisión Nacional de Verdad y Justicia de 1995, contempló en su mandato específicamente en el Artículo 3º, que la comisión debería poner especial atención en las violaciones a los Derechos Humanos cometidos contra las mujeres, así como las agresiones de naturaleza sexual por razones políticas (Truth Commission: Haiti, 1995).

En Sierra Leona, la comisión procuró que todo su personal fuera sensible en el abordaje a las violencias de género, informando y entrenando a los tomadores de las declaraciones, elaborando junto con expertos en violencia de género, directrices para la toma de declaraciones de víctimas de violencia sexual, de tal forma que logró recolectar testimonios de mujeres y niñas con énfasis en las violaciones y abusos que ellas sufrieron (Sierra Leone. Truth & Reconciliation Commission, 2004).

En Ghana, pese a que se le dio relevancia al tema de género en la conformación del equipo de comisionados y se hicieron esfuerzos por capacitar al personal, esta categoría no fue utilizada como categoría analítica durante la implementación del mandato de la comisión. No obstante se resalta en esta comisión que las 3 mujeres comisionadas ofrecieron un ambiente de confianza para mujeres víctimas durante la toma de declaraciones (Vasuki, 2006).

La comisión de Timor del Este se esforzó por mantener orientaciones respecto al tema de género y celebrar sesiones periódicas para fortalecer las capacidades del personal en este tema (Vasuki, 2006).

3.3.2. Creación de unidades específicas de género al interior de las comisiones

La Comisión para la recepción, la Verdad y la Reconciliación de Timor del este, contó con una unidad exclusivamente dedicada al tema de género para transversalizarlo con otras unidades de la comisión y operacionalizarlo tanto en toma de declaraciones como en audiencias públicas, contando con el apoyo permanente de organizaciones y grupos de mujeres fuera de la comisión, así como de ONU (Vasuki, 2006).

Una semana después de iniciar su mandato, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Liberia, ya había realizado su primer entrenamiento en enfoque de género al personal de la comisión. Su mandato explícitamente ordenaba develar los asuntos de género ligados a las violaciones a los Derechos Humanos y demás crímenes (Vasuki, 2006).

3.3.3. Articulación con el movimiento de mujeres

En Timor del Este, ante la baja asistencia de mujeres para presentar sus testimonios, se realizaron entrevistas en profundidad e historias de casos de 200 mujeres sobrevivientes. Grupos de mujeres realizaron proyectos conjuntos de investigación que sirvieron de base para una gran variedad de actividades de la Comisión, incluyendo el informe final. Las organizaciones de mujeres fueron cruciales para ayudar en la identificación de patrones de violaciones de derechos humanos basadas en el género (Vasuki, 2006).

La Comisión de la Verdad de las Mujeres de Colombia, documentó los casos y realizó su informe, con base en la articulación directa y coordinación de la plataforma social Ruta Pacífica de las Mujeres, una red de mujeres víctimas del conflicto armado colombiano, desde un enfoque feminista.

3.3.4. Audiencias y otros mecanismos para visibilizar las violencias específicas contra las mujeres y niñas

En Sudáfrica, varias mujeres y grupos de mujeres solicitaron audiencias privadas con la presencia exclusiva de mujeres y comisionadas, con lo cual sus voces no quedaron en el olvido y pudieron dar importancia a sus experiencias, sin tener miedo de hablar; algunas mujeres pudieron hablar detrás de una cortina. En este país, la CVR atendió el llamado de grupos de mujeres instaurando audiencias sólo para mujeres que fueron presididas por comisionadas para escuchar lo que las mujeres deseaban expresar en un espacio creado únicamente para mujeres. De hecho, las comisionadas tuvieron que luchar por convencer a los demás miembros de la comisión sobre la importancia vital de modificar la metodología establecida para las audiencias públicas y crear condiciones especiales para las audiencias de mujeres.

La Comisión de Investigación de Nigeria facilitó que algunas mujeres pudieran dar su testimonio con el rostro cubierto, para protegerlas de represalias por parte de sus victimarios (Vasuki, 2006).

3.3.5. Visibilización de la violencia sexual contra las mujeres y/o niños y niñas

En Sudáfrica, las mujeres representaron el 40% de los testimonios de casos de víctimas de violencia sexual. En Guatemala se documentaron 1465 casos de violencia sexual, de ellos, el 99% contra mujeres (Vasuki, 2006). En Ghana, las mujeres representaron el 42.9% de las víctimas de violencia sexual. En Timor del Este, las mujeres representaron el 90% de las víctimas de violencia sexual. En Sierra Leona, las mujeres representaron el 100% de los casos de violaciones y esclavitud sexual; y el 38.5% de los casos de denuncias de abuso sexual. En Liberia la comisión de la Verdad y la Reconciliación determinó que las violaciones sexuales fueron patrones sistemáticos de todas las facciones del conflicto que se

enfocaron en las mujeres en razón a su género. Además, se cometieron diversas formas de violencia sexual como la esclavitud, los matrimonios forzados, entre otras.

La comisión de Ecuador documentó 48 casos de víctimas que afirmaron haber sufrido violencia sexual en el marco de la violencia política, estableciendo tipologías como la tortura sexual con descargas eléctricas en senos o genitales (34%), la desnudez forzada (47%), golpes en senos y genitales (23%), violación sexual (10%), amenaza de violación sexual (10%); agresión verbal con contenido sexual (10%), amenaza de daño o secuestro a hijo (7%), acoso sexual, manoseos y toqueteos (12%), tortura durante el embarazo (3%) (Comisión de la Verdad de Ecuador, 2010). En Chile, el informe sobre la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura recibió el testimonio de 3.399 mujeres declarantes, donde casi el 100% expresó haber sido objeto de violencia sexual durante la dictadura y 316 manifestaron haber sido violadas. De estas 3.399 mujeres, 229 fueron detenidas estando embarazadas y 11 de ellas fueron violadas. El informe analiza diferentes formas de violencia y tortura sexual hacia mujeres y menores de edad (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004).

En Colombia, la Ruta Pacífica de las Mujeres, a través de su Informe de la Verdad de las Mujeres, logró documentar testimonios de 933 mujeres de las cuales, el 12% fueron víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, como uno de los continuum históricos de las violencias contra las mujeres (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013).

4. Enfoque y Marco Conceptual

El campo disciplinario en el que se inscriben las Comisiones de la Verdad, es el de la Justicia Transicional, el cual ha tenido sus orígenes finalizando la década de los años 80, para ofrecer un modelo de justicia adaptado a los cambios políticos que emergieron en América Latina y Europa Oriental, donde las sociedades se hallaban en procesos de construcción de

paz y/o transiciones hacia sociedades democráticas, tras largos periodos de violaciones a los Derechos Humanos (Centro Internacional para la Justicia Transicional -ICTJ-, 2013). Es así como ha cobrado importancia la incidencia de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales defensoras de los Derechos Humanos, derivando en la creación de un número significativo de Comisiones de la Verdad (Hayner, 2006):

En los últimos años, ha aumentado significativamente el número y el tipo de comisiones de la verdad en todo el mundo. Desde el establecimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, en 1995, la idea de una investigación no judicial de abusos graves cometidos en el pasado ha captado la atención de nuevos Gobiernos y de grupos de la sociedad civil en varios países. En los últimos veinticinco a treinta años, se han creado comisiones de la verdad en más de treinta países. Dichas comisiones son organismos oficiales temporarios, que se establecen para investigar un tipo de violaciones en un período de tiempo, producir un informe final y formular recomendaciones de reformas. (p.1)

La Justicia Transicional abarca varios componentes o mecanismos que no se excluyen entre sí. A saber: los procesos penales, los procesos de esclarecimiento de verdad, las reparaciones y las reformas jurídicas e institucionales (Centro Internacional para la Justicia Transicional -ICTJ-, 2019). Las comisiones de la verdad se inscriben justamente en los procesos de esclarecimiento de verdad, pues su carácter no judicial permite investigar y esclarecer los crímenes cometidos en el pasado y contribuir de esta forma, a la garantía del Derecho a la Verdad, el cual aunque no ha tenido una convención internacional específica y aún sigue siendo objeto de debates para reconocerle bien como derecho derivado de otros derechos ó como un Derecho autónomo, cuenta con una Resolución que desde Naciones Unidas reconoce su importancia en la medida en que lo relaciona con la disminución de impunidad y lo vincula con la promoción de los Derechos Humanos, instando a los Estados a

conformar comisiones de la verdad como mecanismos no judiciales pero complementarios a estos, cuando lo consideren necesario y existan las garantías para tal efecto (Naciones Unidas. El Derecho a la Verdad. Resolución 12/12 de 1º de octubre de 2009, 2010).

El Derecho a la Verdad es entendido como Derecho y recurso efectivo más allá del individuo y su familia, extendiéndose como derecho de las comunidades y de la sociedad en general a saber, para poder comprender las causas y responsables directos e indirectos de los abusos y crímenes cometidos con el propósito final de prevenir que ocurran nuevamente.

Por su parte, se le considera como un mecanismo que es favorecedor en varios ejes (Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil y Centro Internacional para la Justicia Transicional, 2013):

La verdad puede ayudar en el proceso de recuperación después de eventos traumáticos, restaurar la dignidad personal (con frecuencia después de años de estigmatización) y levantar salvaguardas contra la impunidad y la negación.

El esclarecimiento de la verdad puede iniciar el proceso de reconciliación en tanto que la negación y el silencio pueden incrementar la desconfianza y la polarización. Un orden político basado en la transparencia y la rendición de cuentas tiene más posibilidades de disfrutar de la seguridad y confianza de sus ciudadanos. (p.8)

De la mano de la noción de Verdad, se tiene la categoría de Memoria. Elizabeth Jelín (2012) la describe desde dos contextos: por una parte, como herramienta teórico-metodológica y por otra, como categoría social. También da cuenta de los elementos ó en sus palabras *ejes*, haciendo alusión a componentes propios de la Memoria, tales como el sujeto que rememora u olvida; los contenidos asociados a qué es lo que se recuerda y qué es lo que se olvida; los modos y tiempos, es decir, cómo y cuándo se recuerda y olvida, considerando que el pasado rememorado es activado en un presente en función de expectativas futuras.

Por su parte, la memoria también puede ser activada como dispositivo de transformación. Al respecto afirma Martha Grau (2013):

Los procesos de memoria tienen el deber de reconocer y hacer público que estos grupos han sido víctimas de la violación sistemática de sus derechos y que su condición de víctimas se ha sumado a agravar su situación discriminatoria existente en la sociedad anterior al sufrimiento directo de la violencia. La memoria puede caer en la trampa y riesgo de revictimizar y perpetuar la exclusión estructural que favoreció la violencia si no reconoce su sufrimiento desproporcionado y no se da la voz principal a estos colectivos (p.33)

Ahora bien, desde este marco amplio de Justicia Transicional que incluye mecanismos alternativos de búsqueda de Verdad propendiendo por el reconocimiento y restablecimiento de la dignidad de los sobrevivientes, sus familias, comunidades y que brindan a las sociedades elementos de contexto para la prevención de nuevos episodios de violaciones a los Derechos Humanos como los ocurridos en el pasado ó de aquellos que continúan vigentes, se torna fundamental identificar y visibilizar las formas en que conflictos y/o dictaduras han impactado diferenciada y desproporcionadamente sobre las mujeres, niñas y en personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas, pues es sabido que las formas de violencia en razón a los estereotipos hegemónicos del género, han sido el soporte social y cultural clave, para que en contextos de guerra, estas violencias sean exacerbadas y marcadamente diferenciadas.

En este sentido, surge la categoría de género como una categoría analítica que en palabras de Julissa Mantilla (Mantilla, 2006) quien se interroga por su importancia en las instancias de las comisiones de la verdad, nos da pistas sobre su carácter relevante en relación con la inclusión en el análisis de violaciones a los Derechos Humanos:

Para responder esta pregunta, es importante entender que el concepto de género, que ayuda a entender las desigualdades y la realidad de subordinación de las mujeres, también va vinculado al tema de los derechos humanos y explica el hecho de que las violaciones a sus derechos no hayan sido incluidas directamente en el discurso de los derechos humanos sino hasta una época relativamente reciente...De otro lado, las comisiones de la verdad tienen una responsabilidad importante en la elaboración de una propuesta de reparaciones y reformas institucionales que garanticen la no repetición de los hechos de violencia. En este sentido, una comisión que haya trabajado con un enfoque de género podrá diseñar un programa más completo, que considere en su elaboración casos como los descritos, que realmente ayude a combatir la situación de inequidad y que garantice que no continúen las condiciones que facilitaron y propiciaron las violaciones de derechos humanos (p.p.347-348).

El sufrimiento emocional y los daños psicosociales causados por las graves violaciones a los Derechos Humanos y por las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, permean diferentes niveles de interacción del ser humano, más allá de su propio psiquismo. Las relaciones familiares, el tejido social y los referentes de mundo y de vida pueden verse gravemente afectados en razón a los hechos sufridos y a la experiencia que estos han cobrado a lo largo de su trayectoria de vida, donde habrá tenido que desplegar una serie de recursos psicosociales para afrontar y minimizar tales efectos de tal forma que haya podido continuar con mayores ó menores niveles de afectación o recuperación, según sea cada caso. El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017), define el daño psicosocial como:

“todo perjuicio o menoscabo permanente o transitorio, que genera la pérdida o transformación negativa de valores significativos y creencias; del mundo emocional, el equilibrio anímico y la integridad psicológica, así como del vínculo familiar,

comunitario y colectivo. Estas pérdidas o transformaciones suelen manifestarse con el deterioro del sentido propio de la existencia; la capacidad de proyección futura, sea esta individual o colectiva; los sentidos de pertenencia y filiación social, identidad, seguridad, dignidad, honorabilidad, libertad, autonomía y empoderamiento, ocasionando profundos estados de sufrimiento emocional, desesperación, miedo, temor e irritación, y deteriorando, a la vez, los soportes sociales y legados espirituales propios del bienestar individual y colectivo” (p.38).

Al respecto, Rebolledo y Rondón (2010), refiriéndose al caso colombiano, señalan:

En el acercamiento al trabajo con víctimas debe prevalecer el reconocimiento de la subjetividad, de las necesidades frente al acompañamiento y de los recursos de las colectividades. El modelo occidentalizado de psicoterapia, en donde al individuo, al tratar de singularizarlo, se le saca del contexto social para ser atendido, es aceptado y eficaz en escenarios urbanos, pero en el contexto rural debe incluir los procesos de acompañamiento comunitario y social que hay alrededor de la práctica psicológica. Esencialmente, porque el conflicto armado en Colombia es rural todavía y porque la inscripción de los recursos que se potencien se desarrollan dentro de ese mismo contexto, y, en ocasiones, aún con la presencia de condiciones de intimidación o amenaza (p.41).

Ahora bien, los procedimientos surtidos por las comisiones de la verdad para facilitar la recolección de testimonios de los sobrevivientes o de sus familiares o personas cercanas, pueden favorecer los procesos de recuperación psicosocial, cuando propenden por el otorgamiento de sentido que ha tenido la experiencia traumática para la víctima. Recordar siempre implica actualizar una experiencia, pero desde un tiempo presente, y los tiempos psicológicos no necesariamente son directamente proporcionales a los tiempos lineales

cuando se han sufrido este tipo de violaciones a los derechos humanos. Testimoniar puede ser tan liberador como revictimizante, todo dependerá del camino recorrido para poder situar en la palabra y de la relación que el otro/otra despliegue para la acogida de la experiencia puesta en ésta o en otros símbolos. Esto significa que la experiencia traumática podrá o no ser desprivatizada y volver al lugar en el que tuvo su origen: un contexto social.

Finalmente se trae la noción de testimonio en conexión directa con el ámbito psicosocial, entendiéndose este como un dispositivo que facilita a las víctimas la organización de su experiencia, pero que no logra constituir en sí mismo, una analogía de esta (Andrews, 2007).

5. Estudios de casos de Comisiones de la Verdad: Perú, Paraguay y Colombia

5.1. Caso 1. Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú

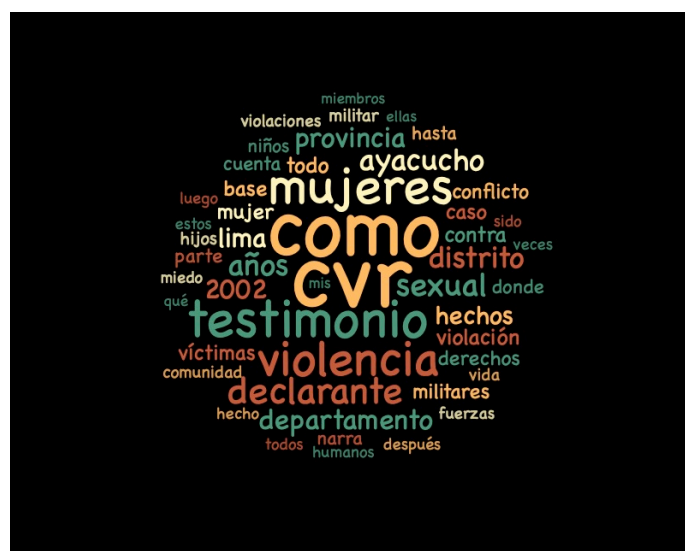


Figura 1. Nube de palabras Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú.

Fuente: Elaboración propia.

5.1.1. El contexto del conflicto armado en Perú

El conflicto armado interno del Perú, es definido por la Comisión de la Verdad y Reconciliación –CVR- como un conflicto de origen político que se extendió entre los años

1980 y 2000 con un número aproximado de 69.280 víctimas fatales, la mayor parte de ellas de origen campesino y residentes en los departamentos del área andina del Perú, que vivían desde antes bajo situación de pobreza y exclusión social, siendo claramente afectada la población con pertenencia étnica que tenía el Quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.

Como causa inmediata del desencadenamiento de la violencia armada, la CVR identificó la lucha armada que inició el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso PCP-SL- contra el Estado Peruano, responsabilizándolo del 54% de las víctimas fatales que se reportaron a la CVR, cuyos postulados políticos tuvieron un nivel de aceptación entre la juventud que se encontraba frustrada en sus esfuerzos de movilidad social ante un Estado incapaz de responder a sus demandas, pero que se fueron desvaneciendo en la medida en que el PCP-SL desvirtuó los postulados maoístas sometiendo a las comunidades campesinas a su voluntad, sin considerar sus necesidades y aspiraciones económicas ni sus referentes organizativos y simbólico-culturales propios. Así, la disidencia individual o colectiva del partido era gravemente sancionada con asesinatos selectivos, masacres y arrasamientos de comunidades enteras. Por su parte, las fuerzas estatales respondieron desproporcionadamente a las provocaciones de PCP-SL, viéndose afectada la población civil, en tanto viejos conflictos intra e intercomunales fueron militarizados, fomentándose así la noción de enemigo, y los altos niveles de desconfianza que afectaron el tejido comunitario (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003a).

Asimismo, la CVR responsabiliza del 1.5% de las víctimas fatales al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru –MRTA- quien emprendió una lucha armada contra el Estado peruano desde 1984. Reconoce también la responsabilidad de los aparatos del Estado y, particularmente, la incapacidad de los gobernantes del periodo del conflicto para dar un manejo adecuado a la subversión y al terrorismo dentro de los marcos democráticos. Por el

contrario, la situación política y militar se agravó con el golpe de Estado de abril de 1992, al frente del cual estaba Alberto Fujimori, entonces presidente electo, que se convirtió en un gobernante autoritario, buscando su extensión y permanencia en el poder de forma corrupta. En el caso de las fuerzas policiales del Perú, la CVR establece que sus prácticas autoritarias y represivas que antecedian al conflicto armado fueron reforzadas durante este, llevando a cabo prácticas de tortura sistemática en interrogatorios, así como detenciones arbitrarias, llegando a ser absorbida por el Servicio de Inteligencia Nacional y las fuerzas militares, distorsionando sus funciones y haciendo parte de una red de corrupción coordinada por algunos representantes del gobierno nacional de la época (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003a).

5.1.2 Estructura de la comisión y mandato

La CVR del Perú fue inaugurada el 13 de julio del 2001, mediante el Decreto Supremo No. 065 de 2001, enmendado por el Decreto Supremo No. 101 de 2001, el cual permitió el cambio de nombre de Comisión de la Verdad a Comisión de la Verdad y la Reconciliación, ratificando el mandato que se había establecido. Estuvo conformada por 13 miembros en total, incluyendo su presidente. De los 13 integrantes, 2 fueron mujeres y concluyó su informe final el 27 de agosto de 2003, siendo entregado al Presidente de la República, al presidente del Congreso y al Presidente de la Corte Suprema del Perú un día después. La CVR Recogió 17.000 testimonios y es reconocida por ser pionera en la realización de audiencias públicas en las regiones más apartadas, donde el conflicto armado fue arrollador (Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2003a).

5.1.3 Hallazgos del Enfoque de género en la CVR Perú

La CVR desde sus inicios contempló la necesidad de incorporar un enfoque de género para el análisis de los hechos de violencia, además de establecer un capítulo específico en su

informe sobre la violencia sexual contra las mujeres. Parafraseando a Julissa Mantilla, ello la convirtió en un referente para las siguientes comisiones de la verdad que tenían apuestas similares en querer visibilizar lo que ha ocurrido a las mujeres y niñas (Mantilla, 2006).

5.1.3.1. Análisis específico del impacto diferenciado del conflicto armado en mujeres y niñas

La CVR reconoce que hubo un impacto diferenciado del conflicto con base en las posiciones sociales y los mandatos de género ejercidos por hombres y mujeres, las cuales se sustentaron sobre desigualdades preexistentes al conflicto armado en relación al género, la pertenencia étnica y la pertenencia a determinada clase social (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003e). Así, la CVR identifica que contra las mujeres se cometieron los siguientes delitos por parte del PCP-Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru –MRTA-:

1. Asesinatos indiscriminados
2. Sometimiento al régimen del terror y obediencia
3. Reclutamiento de niñas y jóvenes
4. Uniones afectivas no deseadas
5. Mujeres guardias de seguridad de los senderistas fueron objeto de violencia sexual

Las Fuerzas Armadas cometieron violencia sexual contra las mujeres de comunidades campesinas y zonas afectadas por el conflicto, con la particularidad de que este tipo de violencia fue utilizada para obtener información, autoinculparlas o para demostrar el poder masculino sobre el femenino o sobre los varones cercanos a estas mujeres que se convertían en extensión del territorio geográfico y social que se quería controlar.

A cargo de integrantes del PCP-SL y de las Fuerzas Armadas, las mujeres fueron víctimas de:

- La desaparición u homicidio de sus familiares, teniendo que abanderar la búsqueda y procesos de exigibilidad de justicia, con todas las implicaciones y cargas económicas, sociales y políticas que ello supuso.
- Adicionalmente, durante sus procesos de exigibilidad de Justicia y Verdad, muchas mujeres fueron víctimas de asedio, violencia sexual, torturas, desplazamientos, detenciones y trabajos forzados, siendo utilizadas como objeto para obligar a hablar a hombres detenidos que eran sospechosos de hacer parte de la subversión.

La CVR (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003e) tuvo un claro reconocimiento acerca de la desigualdad que caracterizaba la inequidad de las mujeres en razón a su género, clase y etnia; explicitando en su informe que el conflicto armado acentuó, transformó y profundizó estas situaciones de inequidad y violencia de género preexistentes:

La CVR cree conveniente señalar que las relaciones entre hombres y mujeres en el Perú -antes del conflicto y posiblemente después de él– no son democráticas, ni justas, ni equitativas. Es sobre este terreno, que el conflicto se desarrolla, acentuando, profundizando y/o transformando estas relaciones. Se trata pues de un sistema de género caracterizado por la desigualdad, la jerarquía y la discriminación. De otro lado es también importante tomar conciencia que la existencia de estas injusticias entre varones y mujeres nos revela la existencia de un orden social, de mecanismos de autoridad y de poder que le sirven de sustento.

La CVR considera oportuno utilizar este enfoque pues permite analizar la interrelación que existe entre la violencia y la organización social que reproduce

sistemas de exclusión y dominación de los cuales hombres y mujeres son partes afectadas (p.46).

5.1.3.2 Creación de una unidad de género al interior de la CVR

En sus inicios, la CVR contrató durante tres meses una consultoría para el análisis desde el enfoque de género. Este proceso fue identificando desafíos y dificultades para asumir este enfoque y, tras presentarse el informe de esta consultoría, mediante Acuerdo de Comisionados, en mayo del 2002 se decide incorporar la perspectiva de género como una línea de trabajo orientada a la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Así, Mantilla, (2006), quien integró desde su formación jurídica la línea de género y el análisis de la violencia sexual contra las mujeres en la CVR del Perú, menciona dos grandes desafíos que encontraron en el proceso de incorporación de esta mirada específica hacia los hechos contra mujeres, en el marco del conflicto armado peruano, y cómo los fueron subsanando. En este sentido, menciona en primer lugar la falta de experiencias previas, en términos de incorporación de la perspectiva de género en comisiones de la verdad como una línea transversal. No obstante, se valieron de aprendizajes de dos experiencias previas: los de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad de Guatemala, quienes dispusieron en su informe final un capítulo que narra la violencia sexual contra las mujeres; y los aprendizajes de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica, específicamente lo relacionado con su análisis diferenciado del Apartheid en las mujeres, en tanto victimarias como víctimas; y la voz de las mujeres, recuperada mediante las audiencias públicas, en las que se hizo el ejercicio de dejar de lado el privilegio de la mirada masculina.

El segundo desafío con el que se encontró la CVR del Perú fue el silencio instalado en las mujeres. La CVR logró identificar que violencias específicas cometidas contra las mujeres en el contexto del conflicto armado, como por ejemplo las violaciones, aparecían relatadas

como daños colaterales, como eventos adicionales, como si la sociedad los hubiese naturalizado por tener repertorios similares que antecedian los hechos puntuales que ocurrieron durante los años del conflicto (Mantilla, 2006).

Por otra parte, la CVR visibilizó los lugares de “agencia” femeninos como los tejidos entre las organizaciones sociales de mujeres para desarrollar procesos de exigibilidad de derechos, como por ejemplo, la búsqueda de sus familiares desaparecidos, reconociendo el lugar de ejercicio de la ciudadanía e incidencia y descentrando la mirada en el carácter vulnerable de la mujer víctima, para darle lugar a esas otras características y herramientas de afrontamiento que han devenido en el ser mujer en el contexto de la guerra (Mantilla, 2006).

La CVR del Perú centró su perspectiva de género tanto en el análisis de las violencias específicas cometidas por todos los actores armados contra las mujeres, como en reconocer los mandatos de género previos al conflicto armado y, mediante esta intersección, da cuenta de ello en su informe final, formulando recomendaciones en materia tanto de reparación como de reconciliación nacional.

El equipo de la Línea de Género de la CVR del Perú tuvo un presupuesto específico y contó con una sede central en Lima así como con enlaces en los territorios, quienes apoyaron el trabajo mediante la formulación de guías específicas para la recolección de testimonios, la sensibilización hacia los propios funcionarios de la CVR, el seguimiento a la incorporación del enfoque en los demás equipos de la CVR y la selección de testimonios emblemáticos que pudieran representar patrones de violencia contra las mujeres, para ser incluidos en el informe final. Una vez posicionada la importancia del tema de género, procedieron a identificar las líneas de trabajo y, con ello, estrategias de investigación que garantizaran su visibilización en el informe final. Estas líneas fueron (Mantilla, 2006):

- Enfatizar en las historias de las mujeres

- Establecer ideas básicas
- Tomar testimonios y desarrollar talleres de capacitación
- Sensibilizar y difundir
- Sostener relación y articulación con las organizaciones de la sociedad civil
- Judicialización de casos
- Decidir si harían incorporación transversal o un capítulo específico para efectos de la presentación del informe final de la CVR

5.1.3.3. Articulación de la CVR con el movimiento de mujeres

La CVR fue estratégica en articularse mediante ejercicios de cabildeo y consulta con personas y organizaciones territoriales y nacionales que tenían experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres. Con ellas desarrolló jornadas de reflexión y sensibilización en los territorios que fueron preparando el lugar para encontrarle sentido tanto a la recolección como al análisis específico de las violencias contra las mujeres. Así mismo, al interior de sus propios funcionarios, desarrolló procesos de sensibilización y formación para que todos comprendieran la importancia de incorporar transversalmente este análisis.

5.1.3.4. Audiencias y otros mecanismos para visibilizar las violencias contra mujeres, niñas

La CVR del Perú organizó una audiencia temática sobre mujer que fue desarrollada en Lima. Previo a su sesión, mediante articulación entre la línea de género y el movimiento de mujeres, se preparó en las regiones mayormente afectadas por el conflicto la participación de algunas mujeres que presentarían testimonios que recogieran las voces de cientos de mujeres, en cuanto a los patrones de violencia vividos en el marco del conflicto armado peruano. Se implementaron vigiliats el día anterior a cada audiencia, con el propósito de preparar a la ciudad para lo que sucedería al día siguiente. Con ello también se expresaba la solidaridad

con las víctimas de la violencia próximas a dar su testimonio. Es así como durante la audiencia, 10 testimonios emblemáticos de mujeres de diferentes regiones fueron presentados, contando con el acompañamiento de otras mujeres de estas regiones que se sentían representadas en estos testimonios.

La instalación de la audiencia contó con palabras de la jueza de la Corte Penal Internacional, lo que le dio un carácter mayormente solemne y relevante. Adicionalmente, cuidaron visibilizar no sólo la violencia sexual sino incluir otras formas y experiencias particulares de las mujeres frente a delitos como el desplazamiento forzado y el tener que asumir nuevos roles como consecuencia de dicho desplazamiento, las torturas sufridas por las mujeres en las instancias de detención, las detenciones arbitrarias, el reclutamiento a cargo de grupos al margen de la Ley, entre otros. Terminadas las tres sesiones de testimonios, se recibieron testimonios de expertas y líderes feministas. El primer panel de expertas trató sobre el impacto y experiencias de la violencia política en la Mujer, participaron dos dirigentes campesinas y dos expertas. El segundo panel trató sobre las recomendaciones que la CVR debería presentar para atender la problemática de la mujer; igualmente participaron otras dos dirigentes campesinas y dos expertas. Esta última sesión de la audiencia pública complementó la comprensión de cómo el conflicto armado afectó a las mujeres de manera particular. Así mismo fue importante para los comisionados recibir sugerencias sobre las recomendaciones que la CVR debería entregar al gobierno al fin de su mandato (Mantilla, 2006).

La CVR del Perú se esmeró por hacer pública y difundir esta audiencia temática. Para ello organizó un día antes, un seminario internacional sobre violencia política y violaciones a los derechos de las mujeres y, al día siguiente de la audiencia, celebró un panel con expertos temáticos, representantes de organizaciones feministas, instituciones del Estado, de tal forma

que el tema de género y violencias específicas contra las mujeres se fuera posicionando más allá de la CVR.

Otro de los mecanismos de visibilización de violencias específicas del conflicto armado contra las mujeres, fue la inclusión de dos capítulos en su informe final, por parte de la CVR del Perú. Uno de los capítulos estuvo orientado a visibilizar la discriminación basada en el género y su exacerbación en el marco del conflicto armado y el otro se centró en visibilizar la violencia sexual contra las mujeres. En cuanto a la violencia sexual, la CVR logró establecer que las violaciones sexuales se cometieron en el 100% de los casos contra mujeres y representaron un porcentaje muy bajo frente al resto de delitos que contra hombres y mujeres documentó esta comisión, lo cual es explicado por la CVR por la vergüenza y el sentimiento de culpa que acompaña a las mujeres para hablar de este delito (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003b).

En cuanto a los responsables de las violaciones sexuales contra las mujeres en el conflicto armado peruano, la CVR estableció que el mayor responsable grupal fue el Estado y las Fuerzas Contrasubversivas, seguidas del PCP-Sendero Luminoso y, finalmente, el Movimiento Revolucionario Tupac Amarú- MRTA. Así mismo, halló una mayor tendencia de las violaciones sexuales en los años 1984 y 1990, en los que simultáneamente se presentó también el mayor número de desapariciones y torturas. La práctica de las violaciones sexuales cometidas por el grupo armado PCP-Sendero Luminoso contra mujeres y niñas fue sistemática durante sus incursiones armadas en las comunidades, en algunos casos antecedían el asesinato de las mujeres y, en otros, específicamente en casos de mujeres jóvenes, antecedían el reclutamiento hacia sus filas. LA CVR documentó también que en el caso de los mandos de este grupo armado, su práctica específica se dirigió hacia mujeres jóvenes, quienes eran esclavizadas por aproximadamente una semana antes de retornarlas a sus comunidades.

La violencia sexual por parte de este actor armado se extendió también hacia las mujeres que integraban sus filas. Algunas que tenían pareja fueron violadas por los mandos cuando sus compañeros sentimentales eran enviados a otros campamentos, lo cual fue generando desconcierto entre algunos seguidores del partido y grupo armado. Otras mujeres fueron obligadas a entablar relaciones afectivas mediante el establecimiento de uniones forzadas, acompañadas de violaciones sexuales, desde un supuesto machista que les hacía creer que al estar con un hombre no desertarían del grupo. Otras, que quedaron embarazadas producto de la violencia sexual, fueron obligadas a abortar. También hubo mujeres, tanto integrantes de filas de estos grupos como civiles que, tras la deserción y/o terminación del conflicto, tuvieron los hijos producto de estas violaciones sexuales (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003b).

La CVR del Perú, también documentó casos de violencia sexual perpetrados por el Movimiento Revolucionario Tupac Amará MRTA. Algunos casos se dieron intrafilas, contra mujeres que habían sido reclutadas desde niñas; otros, como parte de las exigencias de apoyo que les hacían a las comunidades; y otros, como forma de asentar el control territorial en poblaciones acusadas de ser cercanas a las fuerzas armadas del Perú o al Partido Comunista Peruano Sendero Luminoso – PCP-SL (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003b).

En el caso de integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú o de integrantes de otras instituciones estatales, la CVR estableció que la violencia sexual contra las mujeres fue una práctica generalizada, tanto al interior de las incursiones militares como dentro de establecimientos del Ejército y la Policía. Numerosos testimonios dan cuenta de la sistematicidad de violaciones masivas por parte de varios integrantes de las Fuerzas del Orden hacia una misma mujer.

LA CVR estableció que la violación sexual ejercida contras las mujeres y niñas fue ejercida como un método de tortura para obtener información o para obligar a que las mujeres se autoinculparan de acusaciones que se les hacía (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003b). El 83% de los actos de violación sexual son imputables al Estado y un 11% a grupos subversivos. Ayacucho, seguido por Huancavelica y Apurímac fueron las zonas más afectadas por violaciones sexuales, correspondiéndose las víctimas con mujeres de origen campesino, con escasos recursos económicos, algunas viudas y la mayoría quechuahablantes, lo cual las ubica en un lugar de mayor vulnerabilidad entre el universo de mujeres.

5.1.4 Elementos psicosociales

El informe de la CVR de Perú, da cuenta de las secuelas psicosociales que el conflicto armado derivó en individuos, familias y comunidades, considerando el carácter traumático de la experiencia de violencia vivido por miles de personas, desestructurando en ocasiones la capacidad psicológica de defensa y dando lugar al sufrimiento emocional, el silenciamiento como consecuencia de las estrategias de control impuestas y la instalación de climas de terror y desconfianza que debilitaron órdenes sociales de las comunidades (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003c).

5.1.4.1. Disposición de equipos psicosociales para la recolección de testimonios

En Perú se contó con un equipo de psicólogos. Varias organizaciones de Derechos Humanos especializadas en atención psicológica a víctimas de la violencia se vincularon a realizar y apoyar a la CVR en este acompañamiento. Antes de cada audiencia, los y las testimoniantes tenían sesiones con una psicóloga, que evaluaban si la persona estaba en condiciones emocionales para narrar en público esas experiencias traumáticas. La atención se brindaba antes, durante y después de cada audiencia; idealmente, hasta dos veces más después de haber dado su testimonio.

5.1.4.2. Análisis específico de los daños psicosociales y psicológicos

La CVR del Perú, incluyó un capítulo específico, en su informe final, para socializar los principales impactos y daños psicosociales que halló en las víctimas, sus familias y comunidades, a partir de las experiencias traumáticas, irruptivas y desestructurantes a las que estuvieron expuestas; denotando que ello sumó terror, crueldad y destrucción a la vida de muchas personas que ya tenían situaciones de precariedad económica, abandono y marginación. Es importante mencionar que a partir de los testimonios recibidos, la CVR del Perú, identificó y rescató una comprensión psicosocial de la experiencia vivenciada por las víctimas. El miedo y la desconfianza son los elementos mayormente presentes y abarcadores de sus experiencias, trascendiendo la esfera individual y tomando un carácter más social, que caracterizó el clima de las relaciones intra e inter comunitarias (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003c):

El miedo a ser, ellos mismos o sus seres queridos, objeto de maltrato físico, tortura o desaparición, es especialmente intenso en quienes han sufrido tortura y temen que se repita. También está muy presente en quienes fueron detenidos, encarcelados y conlleva temor a la pasividad, a ser sometido y humillado. Muchas personas detenidas refirieron haber sido torturadas y haber experimentado diferentes formas del miedo: el miedo a ser vejados, vejadas, a ser objeto de violencia sexual, a experimentar la intrusión violenta en el cuerpo, en la intimidad; el miedo a ser despojados de sus bienes, de todo aquello que lograron con esfuerzo y mucho trabajo, por ejemplo su tierra, sus animales, su casa, sus objetos personales, es decir, todo aquello que garantizaba su bienestar futuro y era señal de haber superado situaciones de mayor pobreza. La noche y la oscuridad también son referidas como objetos de miedo intenso. Esto se relaciona claramente con el clima de profunda inseguridad que propició sentimientos de desprotección. Los apagones

en las ciudades que las sumían en total oscuridad repentinamente crearon un clima de zozobra, de miedo compartido. Muchas personas obligadas a abandonar su pueblo y su casa, a refugiarse entre las piedras, en las cuevas de los cerros, experimentaron grandes temores, especialmente durante la noche, que era además cuando generalmente llegaba la amenaza violenta. Muchos refieren haber decidido abandonar su casa por las noches. (p.175)

La desintegración de los vínculos familiares y comunitarios es otro de los impactos psicosociales referidos por la CVR del Perú. Desde este ámbito, los referentes de identidad social y cultural, las formas de organización social propias, fueron debilitados o destruidos por las graves violaciones a los Derechos Humanos y las graves Infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el conflicto armado peruano y ello, conllevó la desintegración de familias que se vieron obligadas a desplazarse y dispersarse para poder sobrevivir, alejándose de sus vecinos y rompiendo la relación con la propia tierra lo cual para las comunidades indígenas y campesinas hace parte de sus necesidades vitales. Muchas familias perdieron uno o más integrantes lo que devino en sentimientos de profundo dolor, deterioro de su economía, sentimientos de desolación, soledad y desprotección, acompañados del vacío e incertidumbre tras la exposición al horror de ser obligados a presenciar las ejecuciones de algunos de sus familiares o enterarse que habían sido detenidos y posteriormente, desaparecidos sin ninguna información sobre su paradero.

Los daños a la identidad personal son otro de los efectos psicosociales que causaron las experiencias límites a las que estuvieron expuestas las víctimas del conflicto armado en el Perú. Ejemplo de ello revela el hecho de que cientos de personas negaran o cambiaran sus nombres ante la estigmatización que se había generado en la época del conflicto, donde algunos eran acusados de ser colaboradores o pertenecer al bando enemigo (Perú. Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2003c):

Algunas personas fueron confundidas con otras por su nombre, siendo castigadas o injustamente detenidas. Como ya señalamos, el nombre de una comunidad, de una población, o de una familia fue objeto de estigmatización. A la larga el ocultamiento o negación del nombre, o de otros aspectos de la persona, su estigmatización, constituyeron una experiencia que conllevó cuestionamientos a su identidad y a su autoestima, además de falta de reconocimiento y valoración por parte de otros (p.220).

La violencia sexual afectó en la autoimagen y autoestima de las mujeres y algunos hombres cuyos cuerpos fueron apropiados por los actores armados, para demostrar que su control se extendía hasta lo más íntimo de su persona, afectando la sexualidad, la capacidad de vincularse afectivamente y de confiar en el otro quien se torna amenazante por la experiencia traumática. Por su parte, la tortura como mecanismo intencional al pretender despojar a la víctima de su condición humana, generó continuas experiencias de humillación, dolor, terror y profundos sentimientos de desprotección y vulnerabilidad que van más allá del tiempo preciso en que fueron cometidos los actos, logrando sostenerse en el tiempo, reactivando la experiencia.

Ante la impunidad, las experiencias están asociadas con sentimientos de indignación y pensamientos de desesperanza, ante un sistema que debía protegerlos y que se muestra ineficiente frente a la aplicación de unos niveles de justicia que en parte, pudieran contribuir a restaurar la dignidad. Otro efecto psicosocial que señala la CVR del Perú, es la tendencia a la reproducción de la violencia aún entre quienes fueron víctimas de ella misma (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003c):

Quizá para alejar de sí la enorme impotencia y rabia que ha dejado la violencia vivida en su ser, algunas personas recurren a sus propias tendencias destructivas, orientándolas hacia aquellos que perciben más débiles. Así, la violencia se va reproduciendo, aún a pesar de quienes la sufrieron. Las manifestaciones agresivas van

desde un carácter irritable, intolerante, hasta conductas violentas, pasando por deseos de pegar a otros, castigar severamente a los hijos, etc. (p.249)

Las desapariciones forzadas de miles de personas que fueron detenidas arbitrariamente conllevó profundo sufrimiento emocional en los familiares, ante la incertidumbre de no saber durante años qué sucedió con su familiar detenido-desaparecido. Aunque se tenga en ocasiones la noción de muerte por considerarse que este fue el patrón de actuación de los actores armados, los procesos para asimilar y asumir la pérdida se ven interrumpidos por la ausencia del cuerpo y se complejizan aún más por la presencia psicológica que cobra el desaparecido en la cotidianidad de la familia.

Según estudios psiquiátricos que analizó la CVR del Perú y algunos testimonios recogidos, el incremento del consumo de alcohol y hojas de coca fue significativo entre las comunidades víctimas del conflicto armado como paliativo para “adormecer el sufrimiento emocional”. Aunque muchas veces no era visto como un problema por los consumidores directos, sí lo empezó a ser para sus familiares, pues las relaciones empezaron a verse directamente afectadas. Por su parte, el Servicio de Salud Mental del Hospital de Policía reveló a la CVR que el consumo de alcohol y fármacos se incrementó casi al doble entre su personal dispuesto en las zonas de emergencia durante el conflicto, hechos que fueron explicados como una consecuencia del estrés desencadenado y al que recurrían como un mecanismo paliativo, generando dependencia a estas sustancias (Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2003c).

Finalmente, en este capítulo diseñado para dar cuenta de las secuelas psicosociales, la CVR en su informe final, también reconoce las estrategias de afrontamiento de las que han hecho uso personas, familias y comunidades para enfrentar la violencia y sus efectos. Así, la valentía y el coraje fueron los últimos recursos usados por algunas mujeres para enfrentar a los armados y proteger sus vidas o las de sus hijos. La solidaridad entre familias y al interior

de las comunidades les permitió muchas veces hallar escondites para protegerse mientras duraban las incursiones armadas, haciendo uso del amplio conocimiento de la geografía de sus propios territorios. La solidaridad para acompañarse en medio de tanto dolor, desenterrar a los muertos, proteger a los huérfanos, buscar los que faltaban, y esconderse mutuamente para protegerse, ayudaron a mitigar el sufrimiento que ya había sido causado por la guerra. Por otra parte, algunas organizaciones no gubernamentales brindaron apoyo en materia de procesos de exigibilidad de derechos y/o generación de ingresos con proyectos encaminados a afrontar la pobreza o el desarraigo. Se destaca también el emprendimiento propio que tuvieron muchas víctimas para constituir procesos de organización comunitaria y empezar a buscar a sus familiares desaparecidos, de tal forma que la solidaridad y la identidad comunitaria se fue restaurando en la medida en que se acompañaban durante estos procesos (Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2003c).

La religión fue fuente de afrontamiento del dolor y la desesperanza para muchas personas, fue el canal para continuar viviendo después de la guerra. Para otras personas, se constituyó en la forma de integrar el deseo de justicia por los crímenes cometidos, depositándolo en la espera de una “justicia divina”. También los recursos individuales en términos de capacidades para sobreponerse y continuar viviendo, transformar el dolor en fortaleza y fuente de sentido para recuperar sus vidas y apoyar a sus familias, a veces el recuerdo digno de sus familiares muertos o desaparecidos fue crucial para hacer frente a la adversidad devenida con la guerra (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003c).

5.1.4.3. El lugar del testimonio y sus efectos

En Perú, las mujeres que participaron en estas Audiencias Públicas aseguraron que habían experimentado un alivio después de dar su testimonio. Fue para ellas muy importante

recibir los saludos y las expresiones de solidaridad de otras personas de su comunidad, es significativo para las víctimas sentir que hay un lugar público de reconocimiento de los crímenes cometidos (Mantilla, 2006).

La CVR reconoce que el psiquismo de las víctimas puede verse desestabilizado tanto por el propio silencio que imponen la sociedad, los actores armados, las instituciones del Estado, como por el desconocimiento y ocultamiento de los responsables, hechos estos que niegan y contradicen la contundencia de las heridas emocionales y hasta físicas de las víctimas, de su sufrimiento y llanto que ha sido intenso y certero, despojándolas de su necesidad de nombrar y de situar su experiencia para empezar a encontrarle sentido al sin-sentido del horror vivido. Ante esta contradicción que confunde e incrementa el sufrimiento emocional, el haber podido narrar sus testimonios ante la CVR del Perú, sintiéndose escuchados, abrió las puertas para empezar a tejer hechos atroces y experiencias que hasta ahora les había resultado innombrables a miles de víctimas del conflicto armado peruano, e incluso a victimarios, facilitando la desprivatización, validación, normalización e integración de emociones contradictorias que se tenían guardadas (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003c).

5.1.4.4. Recomendaciones en materia de Rehabilitación Psicosocial

En su informe final, la CVR agregó un capítulo destinado a plantear recomendaciones en materia de Reparación y Reconciliación nacional. El capítulo 2.2 se refiere específicamente al Programa Integral de Reparaciones, –PIR– por sus siglas, el cual se sustentó en las dimensiones ética, jurídica y política de la Reparación, así como en el deber y el derecho a las Reparaciones y, específicamente, el deber del Estado peruano en materia de reparaciones. Este programa se convirtió en instrumento de una Política Nacional de Reparaciones, dirigida a reparar los daños morales, económicos, sociales, causados a las

personas, sus familias y comunidades, así como a contribuir en su recuperación moral, mental y física por los daños causados en el marco del conflicto armado (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003d).

El PIR se estructura en 6 programas. El primero es el Programa de Reparaciones Simbólicas, sustentado en un carácter pedagógico para brindar explicaciones que permitieran hacer inteligible e interpretable lo ocurrido en términos del conflicto armado y contribuir de esta forma a la prevención de su repetición, restaurando el lazo social quebrado por la violencia.

El segundo es el Programa de Reparaciones en Salud, y es justamente este componente el que se dirige a que la población del Perú pueda recuperar su salud mental y física, así como reconstruir aquellas redes de soporte emocional y social que pudieran fortalecer las capacidades locales e individuales de desarrollo personal, buscando empoderar a personas y comunidades en su autonomía y capacidad de reconstrucción de proyectos de vida individual y colectivos. Estas recomendaciones específicas las sustentó la CVR del Perú con base en las consideraciones e investigaciones que realizó durante su mandato acerca de las secuelas psicosociales y psicológicas que habían devenido vinculadas al conflicto armado, tales como la desconfianza, el temor generalizado, la inseguridad, la parálisis, el sufrimiento generado por la violencia y su persistencia en el tiempo; las cuales agudizaron conflictos intra-comunales que preexistían a los años de la guerra y que deterioraron expresiones de solidaridad que les caracterizaba, generando rupturas familiares y debilitamiento en las expresiones que daban sentido a la identidad cultural de las comunidades campesinas e indígenas del Perú, así como restando su capacidad local de ser soporte emocional y referente cultural para las nuevas generaciones (Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú, 2003d).

En complementariedad con estos dos programas se ordenó la creación del Programa de Reparaciones en Educación, para brindar nuevas oportunidades de acceso a las personas que por razón del conflicto armado no habían podido continuar ni finalizar sus estudios. Se ordenó también dentro del PIR la creación del Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos, para restablecer su ejercicio pleno y efectivo de derechos ciudadanos, civiles y políticos. Entre estos se encontró la regularización de la situación jurídica de personas desaparecidas, de los requeridos indebidamente por delitos como terrorismo o traición a la patria, de los indocumentados por razones asociadas al conflicto armado. Se incluyó también el asesoramiento jurídico para las víctimas de los diferentes delitos que se cometieron durante los 20 años del conflicto armado.

Un quinto programa ordenado en el PIR fue el de Reparaciones Económicas, dirigido a compensar daños morales y materiales ocasionados a las víctimas y sus familiares. El sexto fue el Programa de Reparaciones Colectivas, que se dirigió a contribuir en la reconstrucción de la institucionalidad colectiva de las comunidades y su infraestructura productiva, otorgando recursos para su recuperación integral, especialmente en comunidades campesinas y nativas.

Finalmente, y con posterioridad a la entrega del informe final de la CVR del Perú, considerando su recomendación de constituir una entidad de carácter nacional que pudiera hacer seguimiento a estas recomendaciones, se constituyó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN-, mediante Decreto Supremo No. 011-2004-PCM, como la instancia encargada de monitorear las acciones políticas ordenadas en el PIR (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, 2019).

5.2. Caso 2. Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay



Figura 2. Nube de palabras Informe de la Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay.

Fuente: Elaboración propia

5.2.1. El contexto de la dictadura en Paraguay

La dictadura de Alfredo Stroessner a diferencia de otras que se han propiciado en América Latina y que han tenido un carácter basado en el autoritarismo, tuvo elementos claros de totalitarismo por la estrategia utilizada entre varios actores que facilitó su sostenimiento en el poder. El gobierno del militar Alfredo Stroessner constituyó una alianza con las Fuerzas Armadas y el partido político Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, que se denominó “unidad granítica”, pudiendo controlar en su totalidad el Estado, la sociedad y, como lo afirma la CVJ de Paraguay (2008a), “persiguiendo, eliminando, excluyendo, extirpando e incluso aniquilando cualquier foco, intento o proyecto de oposición y lucha, sean éstos por la vía pacífica o armada” (p.34). Así, las fuerzas armadas exigían la afiliación de todos sus miembros al partido Colorado y proclamaban públicamente el apoyo a Stroessner como el único líder, exigiendo que quienes quisieran integrar el cuerpo de las

fuerzas armadas debían estar afiliados al partido. La dictadura le quitó la independencia al poder judicial y le otorgó todo el poder al ejecutivo.

El discurso sobre el que se legitimó autoritariamente el stronismo fue “democracia sin comunismo” y estuvo ligado a la Doctrina de Seguridad Nacional promovida por Estados Unidos en el marco de la alianza continental anticomunista generada en la guerra fría, lo que permitió que Paraguay recibiera el apoyo económico y militar de sus aliados, instalando las nociones conocidas como “enemigo interno”, “guerra sucia” y “guerra de baja o mediana intensidad”, sirviendo de argumentos para llevar a cabo la persecución contra todo aquel que perteneciera a un movimiento político de oposición, a las Ligas Agrarias Campesinas o al movimiento estudiantil.

Para comprender el contexto de la dictadura stronista por casi 35 años en la República de Paraguay, la CVJ ha dividido el periodo en que esta se mantuvo, es decir desde 1954 hasta 1989, en tres periodos de tiempo, de tal forma que puedan apreciarse en cada uno de ellos las características que hicieron particulares los patrones de violación sistemática de los Derechos Humanos (Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay, 2008a). Así se tiene:

5.2.1.1. Primera Etapa. Inicio de la Dictadura: 1954-1966

Durante esta etapa de la dictadura, las fuerzas del Ejército, la Policía, los parapoliciales y subalternos fueron los mayores ejecutores de las violaciones a los Derechos Humanos, tales como prisión prolongada, exilio masivo, torturas sistemáticas y ejecuciones extrajudiciales, realizadas mayoritariamente en campos de concentración, en la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos -DNAT- creada con el asesoramiento norteamericano, los comandos militares y los calabozos de las comisarías. El rol del poder judicial fue complaciente y cómplice con el ejecutivo. La dictadura se caracteriza además por eliminar o desalentar a sus opositores, copar las instituciones de la sociedad civil y obligarlos a afiliarse

al partido Colorado. Internacionalmente el gobierno dictatorial recibió el apoyo directo de Estados Unidos y de otros países limítrofes, aunque también recibieron apoyo internacional quienes se resistían al gobierno.

5.2.1.2 Segunda Etapa. Consolidación de la dictadura, con rostro “democrático”: 1967-1981

Son directamente miembros de la Policía, del Ejército y organismos parapoliciales quienes en este periodo se encargan de llevar a cabo las violaciones a los Derechos Humanos, caracterizadas por tener una menor prolongación que en el periodo anterior. Las torturas tienen un carácter más selectivo al igual que las ejecuciones extrajudiciales en este periodo de tiempo y se llevaron a cabo principalmente en las estaciones de la Policía a nivel nacional y departamental, desde donde luego enviaban los presos hacia la cárcel pública. En esta etapa, la tendencia dictatorial fue realizar una eliminación mucho más selectiva de la oposición y, reprimir y duplicar las instituciones de la sociedad civil. Desde el ámbito internacional, este periodo se caracterizó por recibir colaboración por parte de dictaduras regionales.

5.2.1.3 Tercera Etapa. Crisis del régimen dictatorial: 1982-1989

La mayor fuerza de actuación para la comisión de violaciones de los Derechos Humanos, durante esta etapa estuvo en manos de la Policía. Sus acciones se caracterizaron por prisiones mucho más cortas y se observa una disminución de la tortura sistemática del periodo anterior. Los lugares de mayores violaciones fueron las estaciones de Policía, desde donde enviaban a los detenidos a las cárceles públicas. El rol del poder judicial fue de judicialización de la persecución política. Las represiones fueron menos violentas y se observa una pérdida de control autoritario de la sociedad civil. Internacionalmente se generó apoyo norteamericano a la transición que inició durante este periodo. La disputa interna del Partido Colorado entre quienes reclamaban una mayor autonomía y quienes defendían la

subordinación del partido a la familia Stroessner, desencadenó en un golpe de Estado el 03 de febrero de 1989 con el que derrocaron a Stroessner quien fue asilado por Brasil uno de sus mayores aliados, hasta su muerte.

5.2.2 Estructura de la comisión y mandato

La instalación de la Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay en el año 2004, se logró luego de ser sancionada la Ley 2225/03 tras continuas peticiones e incidencia de la sociedad civil ante el Parlamento Nacional y concluyó su informe final el 28 de agosto de 2008. Su trabajo se orientó hacia la investigación de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas principalmente durante el periodo del régimen dictatorial de carácter totalitarista dirigido por Alfredo Stroessner desde 1954-1989, pero también documentó en menor cantidad testimonios de violaciones que se dieron durante la transición entre 1990 y 2003, bajo el entendido que la caída de Stroessner se dio por un autogolpe de las fuerzas militares que lo apoyaban en alianza con el Partido Colorado, razón esta que permitió que las violaciones a los Derechos Humanos se extendieran por más de una década. El mandato de la Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay (2008a) se delimitó a:

Según su Artículo 1º, la CVJ tiene a su cargo (a) investigar lo que pueden constituir hechos de violaciones de los Derechos Humanos (HVDH) cometidos por agentes estatales y paraestatales entre mayo de 1954 y octubre de 2003, y (b) recomendar la adopción de medidas para evitar que los HVDH se repitan, consolidar el Estado democrático y social de Derecho con plena vigencia de los Derechos Humanos y fomentar una cultura de paz, solidaridad y concordia entre los paraguayos.

Según los incisos del Artículo 2º, citados a continuación, sus funciones son esclarecer la Verdad: (a) estudiar las condiciones y comportamientos que contribuyeron a la ocurrencia de los HVDH, (f) contribuir a establecer la verdad de manera oficial,

delimitando la responsabilidad del Estado en los HVDH, y (g) establecer la relación entre políticas nacionales e internacionales y los HVDH (p.19).

La Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay- en adelante CVJ por sus siglas, estuvo conformada por 9 comisionados incluyendo su presidente. De los 9 comisionados, 1 fue mujer. La CVJ registró en su base de datos 2.059 testimonios que dan cuenta de la sistematicidad de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas principalmente durante el régimen conocido como el “stronismo”. Totalizó 20.090 víctimas directas, con multiplicidad de delitos. Así, 19.862 fueron víctimas de detenciones arbitrarias; 18.772 fueron víctimas de tortura; 3.470 exiliadas; 336 desaparecidas; 59 ejecutadas extrajudicialmente, reconociendo un subregistro en el exilio y en la violencia sexual contra mujeres y niñas. De igual manera, la CVJ estimó un promedio de 5 familiares que fueron afectados indirectamente por cada víctima directa, para un total de 107.987 víctimas indirectas, representadas así: 99.312 familiares o personas cercanas perjudicadas por las detenciones arbitrarias y/o torturas; 290 familiares o allegados de personas que fueron ejecutados extrajudicialmente; 1.680 personas allegadas o familiares de quienes fueron desaparecidos y 17.348 familiares o allegados perjudicados por el exilio directo de sus familiares o conocidos (Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay, 2008a).

Cinco departamentos fueron los mayormente afectados en Paraguay, adicional a su capital Asunción, por las violaciones a los Derechos Humanos propiciadas durante el régimen stronista y representaron el 50,46% del total de las víctimas. Estos fueron: Caaguazú con 13% de violaciones, Misiones con 12%, Paraguarí con 10%, Cordillera con 8% y Central con 7%. El carácter implacable del régimen se extendió hasta otros países. En Buenos Aires, Argentina y en el gran Buenos Aires se cometieron 71 desapariciones contra paraguayos entre 1976-1978, en el marco del Operativo Cóndor. LA CVJ identificó patrones de las violaciones por años, encontrando que se cometió mayor sistematicidad de torturas en 1959;

en 1960 se destaca la comisión de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales; en 1965 reaparece la comisión de torturas y desapariciones; en 1970 confluyen las detenciones arbitrarias con las torturas; en 1975 las detenciones, torturas y se le suman las desapariciones; 1976 destaca nuevamente por las desapariciones; entre 1977 y 1978 se cometieron desapariciones junto con ejecuciones extrajudiciales; en 1980 torturas con ejecuciones extrajudiciales y al finalizar el régimen se incrementan nuevamente las detenciones arbitrarias entre 1987 y 1988.

5.2.3 Enfoque de género para considerar el impacto diferenciado de la dictadura en mujeres y niñas

Uno de los núcleos temáticos de investigación de la CVJ de Paraguay, fue la situación de los derechos humanos de los niños, niñas y mujeres, para lo que la CVJ dedicó el tomo III de su informe final, en el que consideró las violaciones de derechos a grupos en situación de particular vulnerabilidad (Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay, 2008b):

Junto con la discriminación de género, las barreras económicas para el acceso a la justicia, a la educación, a la salud, a una vida digna constituyen hoy el resabio y las secuelas de un sistema que se apropió de las bases del sustento, de las formas de vida, de los cuerpos y de la vida misma de mujeres y hombres, en particular de los más vulnerables. Estos obstáculos constituyen limitaciones para la atención y reparación de las secuelas físicas, psicológicas y sociales, que en la actualidad siguen desatendidas. Es necesario que el Estado realice políticas dirigidas a la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y medidas de no repetición de los derechos vulnerados (p.84).

También en el tomo IV presentó las diferencias de género y el impacto específico de la violencia en las mujeres (Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay, 2008b). Las mujeres representaron el 14,1% del total de víctimas y los menores de edad el 10,8%.

5.2.3.1. Análisis específico del impacto diferenciado de la dictadura en mujeres y niñas

La CVJ refiere que aunque la discriminación basada en el género es previa a la dictadura stronista, las violaciones a los derechos humanos que se cometieron bajo el sistema represivo, reforzaron, amplificaron y profundizaron dicha discriminación, haciéndola legítima en el marco de su carácter autoritarista y totalitarista, hasta el punto de instalarlas como parte de su orden social y exacerbando otras formas de violencia basadas precisamente en el género, tales como la esclavitud sexual, la tortura sexual, la privación de libertad de hijos e hijas, la desintegración familiar, exclusión social, entre otras (Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008b).

Para el análisis del impacto diferenciado del régimen stronista sobre las mujeres, la CVJ consideró tanto las diferentes tipologías violaciones como las condiciones específicas de la violencia en contra de las mujeres, los factores de vulnerabilidad e impacto selectivo y su rol en el ámbito social y/o organizativo (Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay, 2008b).

Uno de los hallazgos que refiere la CVJ frente a los impactos diferenciados del régimen represivo hacia las mujeres está relacionado con que expresan poco las maneras cómo fueron victimizadas individualmente como mujeres, dando prevalencia a cómo fueron victimizados sus familiares o allegados. Sumado a esta tendencia a privatizar el daño en la intimidad se halla la dificultad que luego enfrentan las mujeres para que avances investigaciones en materia de violencia sexual. Sobre las mujeres recae la carga económica de las familias, especialmente cuando son sus esposos o hijos quienes fueron asesinados o

desaparecidos, adicional a los procesos de duelo e impacto por las pérdidas o ausencias. Ahora bien, en un régimen que extendió la sospecha frente a todo allegado a los hombres acusados de ser potencialmente peligrosos, la represión recayó directamente sobre las mujeres que eran o bien familiares, o bien acusadas de tener algún vínculo con estos hombres. Las mujeres también fueron objeto de represión en el régimen stronista por haber formado parte de experiencias comunitarias que controvertían el mandato o directamente por militar o ser lideresas en organizaciones sociales, estudiantiles o campesinas que se oponían al régimen. Durante los asaltos y cercos militares que fueron característicos de la dictadura y que fueron llevados a cabo por integrantes de las fuerzas militares contra las comunidades, las mujeres estuvieron expuestas a violencia y/o esclavitud sexual.

Las necesidades de salubridad e higiene específicas de las mujeres en contextos de detención no fueron satisfechas, viéndose deteriorada su salud sexual y reproductiva en varios casos. En contextos de tortura, la tortura psicológica con amenazas de muerte hacia sus familiares, fue una de las violencias específicas usadas contra las mujeres para obligarlas a brindar información a los miembros de la fuerza pública.

5.1.3.2. Audiencias y otros mecanismos para visibilizar las violencias contra mujeres y niñas

El 24 de julio de 2007, la CVJ desarrolló la audiencia pública sobre mujeres, niños y niñas en la dictadura stronista en el marco del conjunto de audiencias organizadas bajo el lema “quien olvida, repite” (Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008b).

Mediante los testimonios recibidos de forma pública y privada, la CVJ estableció en relación con la violencia sexual, que del total de mujeres participantes, un 9% manifestó haber sido víctimas de violencia sexual. Considera que impactos como la vergüenza, la culpa, el miedo al convivir incluso con los victimarios o el estigma, influyeron para que se

presentara un significativo subregistro de este delito. Este hecho fue utilizado como una estrategia de represión para ejercer control directo sobre las mujeres, pero también sobre los hombres cercanos a las mujeres que fueron violadas. Las niñas entre los 12 y 15 años de edad fueron objeto de violaciones y abuso sexual por parte de integrantes de las fuerzas militares y de policía, quienes las esclavizaban sexualmente y las obligaban a participar en orgías. Ahora bien, la CVR establece varios tipos de violencia sexual que se presentaron durante el régimen y que al sumar los casos de mujeres que fueron víctimas de uno o más de estos, el porcentaje de mujeres víctimas de violencia sexual, asciende al 23,7% de las mujeres. Los tipos de violencia sexual que estableció la CVJ de Paraguay, fueron:

- Manoseos
- Acosos
- Posturas humillantes
- Desnudos forzados
- Amenazas directas de violación sexual
- Amenazas de violación sexual a familiares
- Violación sexual
- Embarazos forzados
- Esclavitud sexual
- Tortura sexual
- Comentarios degradantes al cuerpo y al género
- Obligación de presenciar violaciones sexuales hacia otras personas

La CVJ concluye que el 15,5% de la población infantil, sufrió algún tipo de violencia sexual, del cual, el 63% fueron niñas y el 37% niños. De igual manera establece que el 37%

de las personas que sufrieron violencia sexual, fueron violadas (Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008b).

5.2.4 Elementos psicosociales

5.2.4.1. Disposición de equipos psicosociales para la recolección de testimonios

La CVJ creó una Unidad de Salud Integral que se dedicó a brindar asistencia psicológica a víctimas, testigos y cuando fue necesario a los propios funcionarios de la comisión que se encargaban de recibir los testimonios de las víctimas. Esta unidad fue vehículo para facilitar procesos de apoyo psicosocial a familiares de desaparecidos y prevenir la revictimización que podría generar la etapa de búsqueda de familiares desaparecidos, contando con un equipo dedicado a la atención psicológica y a la valoración de daños producidos por delitos de lesa humanidad como la tortura. En este sentido, la unidad también elaboró informes médicos de las secuelas de la tortura e informes psiquiátricos para valorar el daño y servir como prueba ante instancias judiciales para quienes solicitaron indemnización económica (Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008c).

5.2.4.2. Análisis específico de los daños psicosociales y psicológicos

El equipo de la CVJ de Paraguay, documentó y estableció formas específicas de tortura psicológica que fueron practicadas a adultos y niños, tales como las amenazas de muerte y las humillaciones acompañadas de insultos y comentarios degradantes. En este sentido, la CVJ estableció que particularmente con niños y niñas los torturadores les amenazaban con asesinar a sus familiares, les obligaban a permanecer como espectadores de la tortura hacia otras personas, les amenazaban con violencia sexual y los condicionaron con sonidos musicales que se volvieron referentes de la anticipación de mecanismos de tortura. El miedo a ser nuevamente violentados es uno de los impactos psicológicos que ha derivado en exilio y marginación en muchos de estos niños, poniéndoles en mayor vulnerabilidad social

de ser nuevamente agredidos. Por su parte la experiencia de violencia sexual en estos niños y en mujeres adultas, ha generado afectaciones directas en sus relaciones afectivas y de pareja en la adultez para el caso de niños y niñas. Las personas que fueron víctimas, tienden a tener dificultades en el sostenimiento de las relaciones sexuales, en ocasiones reactivándose la experiencia traumática (Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008c).

La maternidad es otro ámbito afectado con frecuencia por la violencia sexual, particularmente en situaciones de embarazo producto de la violación sexual, en los que se experimentan emociones encontradas como rechazo al hijo, dilemas morales, éticos, a lo que se suman los juicios que la sociedad imprime sobre estas mujeres, con base en sus ideales de “buena” o “mala” madre.

Frente al delito de desaparición forzada, la CVJ consideró que el sufrimiento emocional es particularmente profundo en razón a la incertidumbre que vivencian constantemente los familiares, sobre el paradero de la persona desaparecida (Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008c).

Respecto a los impactos psicológicos, la CVJ encontró que las mujeres en comparación con los hombres, nombraron más el miedo, la tristeza y tuvieron más expresiones de llanto y desorientación, así como angustia y ansiedad. Las mujeres se percibieron más aisladas socialmente tras la dictadura en tanto sus relaciones familiares, vecinales o comunitarias se vieron gravemente afectadas. Asimismo, encontraron menos ideas persecutorias en las mujeres, en comparación con los hombres, quienes fueron mayormente sometidos a actos de tortura física.

A nivel familiar, las mujeres refieren más conflictos intrafamiliares y afectaciones en su salud sexual y reproductiva como consecuencia de la violencia sexual. También la sobrecarga económica y social ha recaído más fuertemente sobre las mujeres quienes han

sentido un cambio abrupto en sus roles, teniendo que asumir además de las prácticas del cuidado históricamente asignadas a ellas, las prácticas del sostenimiento económico y la educación de los hijos. Esto está directamente asociado con un impacto desproporcionado en las mujeres, donde muchas no pudieron continuar con sus proyectos individuales como por ejemplo concluir una carrera universitaria que habían iniciado en los años del régimen, configurando un patrón de pérdida de oportunidades que las ubica en mayor desventaja que a los hombres.

5.2.4.3. Recomendaciones en materia de Rehabilitación Psicosocial

En materia de Rehabilitación dentro del Derecho a la Reparación de las víctimas, la CVJ de Paraguay ordenó la creación de un Programa de Reparación Integral de asistencia médica y psicosocial que debería incluir un componente de formación específica al personal de salud en atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos y que debería estar adscrito al Ministerio de Salud de Paraguay. Ahora bien, considerando la diversidad de los pueblos indígenas de Paraguay, la CVJ ordenó al Congreso Nacional el aumento del presupuesto para el Instituto Nacional Indígena, de tal forma que los pueblos indígenas pudieran acceder de acuerdo a sus propias culturas, a condiciones dignas de salud, educación y otros servicios básicos, en línea con los principios y derechos contenidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay, 2008c). La coordinación del Programa de Reparación Integral de asistencia médica y psicosocial estaría bajo la coordinación de una Secretaría Nacional de Derechos Humanos adscrita directamente a la Presidencia, cuya creación también fue recomendada por la CVJ de Paraguay.

5.3. Caso 3. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia

5.3.1. El contexto del conflicto armado en Colombia. Orígenes y etapas.

Colombia cuenta con 42.800.000 habitantes, de los cuales el 51,4 % son mujeres y el 48,6 % son hombres. El 15,1 % de la población total, es decir 6.462.800 viven en zonas rurales dispersas y el 7,1 % en centros poblados rurales; es decir 3.038.800 personas, para un total de 9.501.600 que habitan aún en zonas rurales. Por su parte, el 77,8 % habita las cabeceras municipales y/o ciudades capitales de los departamentos (Departamento Nacional de Estadística –DANE-, 2018).

La Constitución Política colombiana reconoce tres grupos étnicos, cuyos miembros además de ser sujetos de derechos individuales, gozan también de derechos colectivos pues son considerados en sí mismos sujetos colectivos. Los tres grupos étnicos reconocidos son: indígenas, quienes representan el 3,4 % de la población nacional; Afros, negros, raizales y palenqueros quienes, en su conjunto, abarcan el 10,6 % de la población y, por último, la comunidad gitana o pueblo Rrom, con un censo aproximado de 5.000 personas (Gobierno de Colombia, 2018).

La desigualdad social existente, en un país rico en recursos naturales (hídricos térmicos, mineros y agrícolas) pero que concentra el 90 % del capital en menos del 5 % de la población, converge como origen de los conflictos agrarios de la primera mitad del s. XX. Otros factores, como los altos niveles de corrupción política, la diversidad cultural y social o el narcotráfico, que se expandió en los años 80 con el abrupto enfrentamiento de los cárteles de la droga, han derivado en y sostenido en el tiempo un complejo conflicto armado interno, con diferentes actores y repertorios de violencia que, según los historiadores, se remonta a los años 60 del siglo pasado con la constitución formal de los primeros grupos guerrilleros: las

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP), el Ejército de Liberación Nacional, (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL); grupos que aún hoy perviven, con nuevos actores y aliados del narcotráfico, tras las diferentes desmovilizaciones y acuerdos de paz firmados desde la década de los 80.

5.3.1.1 Primera Etapa. Nacimiento, Expansión y Control de las Guerrillas (Años 60 - 1996).

Desde la década de 1950, el Partido Liberal, en oposición al poder militar del Partido Conservador, promovió las guerrillas comunistas, en las que las FARC-EP encontraron sus bases sociales. Esta eclosión de guerrillas afines con las revoluciones de Cuba y China, son descritas como formas de identificación de la población joven como sujeto político con el cambio social, influida por revoluciones estudiantiles que se daban paralelamente en Europa y como forma de oposición al gobierno de los Estados Unidos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).

Las guerrillas se fueron expandiendo a lo largo del territorio nacional con gran éxito a principio de los 80, cooptando a la población, sobre todo rural, como objeto de su influencia y control directo. Entre los principales repertorios de violencia para su dominio territorial se evidenciaron los secuestros y las extorsiones a ganaderos, comerciantes, políticos y terratenientes. Ante esta oleada, el Ejército Nacional desarrolló una ofensiva contra-insurgente que obligo a las guerrillas a replegarse hacia las montañas y zonas más aisladas, donde pudieron ejercer vínculos cercanos con las poblaciones, las cuales se sentían “protegidas” bajo su influencia, ante el abandono estatal, y sentían afinidad con la lucha por la causa social que al principio la abanderaba; bajo influencia comunista en el caso de la ex guerrilla de las FARC-EP y marxista-leninista pro-revolución cubana en el de la guerrilla del

ELN. Esta simpatía con algunas comunidades generó por una parte posicionamiento de las guerrillas y, por otra, la aceptación social de varias comunidades.

5.3.1.2 Segunda Etapa. Disputa Armada del Territorio entre Guerrillas y Paramilitares (1997-2006)

Con el auge del narcotráfico, en la segunda mitad de la década de 1980, se crean las primeras alianzas entre los principales jefes de bandas de narcotraficantes y las primeras autodefensas campesinas, en la zona del Magdalena Medio, para constituir una estrategia de lucha contra las extorsiones y secuestros que hacían parte del repertorio tradicional de las guerrillas hasta entonces. En esta alianza, uno de los principales narcotraficantes, junto a ganaderos de la región, contactaron al mercenario Israelí Yair Kelin para que entrenara en tácticas de guerra a integrantes de las autodefensas campesinas en un primer momento y, después, del mismo ejército colombiano. En la segunda mitad de la década de los 90 se constituyeron formalmente como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo de carácter paramilitar que tomó fuerza de expansión hacia finales de esta década y contó con el respaldo ilegal de algunos altos miembros del Ejército Nacional de Colombia (Verdad abierta, 2012).

Desde finales de los años 90, con la expansión de las AUC, se inician nuevos repertorios de violencia con una mayor sevicia contra la población civil principalmente, por encontrarse en medio de tres actores armados, dos de ellos enfrentados por el control territorial: guerrillas y paramilitares o AUC, quienes en repetidas ocasiones tuvieron como ya se mencionó el respaldo del tercer actor armado: los integrantes de la fuerza pública. La población civil se vio involucrada en múltiples señalamientos de ser colaboradora de uno u otro actor armado, lo que dio lugar a su estigmatización y a la violación de sus Derechos, así como a acciones contra el Derecho Internacional Humanitario.

En los primeros años de la década del 2000 se tiene un periodo de exacerbación y degradación de la guerra, con el mayor número de víctimas no sólo entre contendientes sino civiles, al generalizarse las lógicas de violencia con delitos de lesa humanidad, como desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual contra mujeres y niñas, atentados terroristas y desplazamientos masivos de población principalmente rural.

5.3.1.3 Tercera Etapa. Grupos Pos-Desmovilización (2007-2019)

En el año 2005, al amparo de la Justicia Transicional, se promulgó en Colombia la ley 975, conocida como Ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) o grupos paramilitares, y con ella se inició un proceso de Reparación a víctimas del conflicto armado. Entre el 23 de noviembre del 2003 y el 15 de agosto de 2006 se desmovilizaron 31.472 combatientes de este grupo armado (Justicia Transicional, 2015). No obstante, hubo algunas estructuras de las AUC que no se desmovilizaron, otras que habiéndolo hecho luego se rearmaron y conformaron nuevas alianzas criminales asociadas la mayoría al narcotráfico. A la fecha en el país existen 26 estructuras criminales identificadas entre guerrillas, disidencias y bandas criminales (El Espectador, 2018).

Algo similar, aunque en menor escala en cuanto a número de víctimas, ha ocurrido con la comisión de actos delictivos por armados del Frente 1 de la guerrilla de las FARC-EP, que rechazaron el proceso de desmovilización tras la firma del Acuerdo de Paz (Verdadabierta, 2018). Por otra parte, cientos de excombatientes han decidido volver a tomar las armas tras experimentar incumplimientos del actual gobierno nacional respecto a las promesas y acuerdos a los que se llegaron para lograr su reincorporación a la vida civil (The New York Times Es, 2018). Otro elemento relevante, tras la desmovilización de las FARC-EP y la firma del Acuerdo de Paz, tiene que ver con el homicidio sistemático de cientos de ex

combatientes de dicho grupo que se habían desmovilizado. Desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz con la ex guerrilla de las FARC-EP y, al mes de abril de 2019, se tiene información de 129 excombatientes asesinados (Semana.com, 2019).

5.3.2. Enfoque de género en el Impacto diferenciado y desproporcionado del conflicto armado colombiano en mujeres y niñas

La categoría de género como categoría analítica, ha facilitado la visibilización e interpelación de los elementos estructurales que sostienen el continuum de la violencia en muchos lugares del mundo. El género es entendido como “aquella construcción social y cultural que se articula a partir de las definiciones de lo masculino y lo femenino y que analiza las relaciones conflictivas de poder tanto entre hombres y mujeres como en la sociedad en su conjunto” (Díez y Mirón, 2004, pág.70)

La violencia basada en el género antecede al conflicto armado, al haberse configurado históricamente su acento durante el periodo de la conquista y la colonia, favoreciendo una sociedad con rasgos patriarcales en los que las significaciones otorgadas al “ser hombre” y a todo lo asociado a lo “masculino” gozan de privilegios económicos, sociales y políticos sobre lo que en este tipo de estructura social y cultural representa el “ser mujer”. Es por ello, que la guerra exacerba formas de violencia que pre-existían en los órdenes sociales, generando un “continuum de violencia de género” (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017), que en el caso colombiano, como en otros contextos de conflictos armados o dictaduras, ha manifestado las peores formas de degradación de la guerra contra las mujeres, niñas y adolescentes, así como también contra personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas (Villellas, 2010 y 2016; Frieyro & Róbles, 2012; Vargas & Díaz, 2018). Es precisamente la hegemonía patriarcal lo que ostenta un actor armado con el uso de la violencia para imponer sus propios órdenes sociales que, en cuestiones de género, han

adquirido elementos distintivos entre los diferentes grupos armados legales e ilegales en Colombia, sancionando cualquier transgresión a lo social e históricamente impuesto, con repertorios de violencia mucho más marcados y diferenciados hacia las mujeres, niñas y población LGBTI.

La Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estableció las medidas para la Asistencia, Atención y Reparación a las Víctimas del Conflicto Armado (Congreso de la República de Colombia, 2011). Este marco normativo estableció, dentro de su infraestructura institucional, el Sistema Nacional de Información y, dentro de éste, el Registro Único de Víctimas, en adelante - RUV - por sus siglas, el cual da cuenta de 8.803.836 personas registradas como víctimas del conflicto armado a 1° de abril de 2019 (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2019).

Tabla 1

Número de personas víctimas del conflicto armado en Colombia por hechos victimizantes con corte a 1° de abril de 2019

Género	# de Personas víctimas
Mujer	4.412.041
Hombre	4.387.809
LGBTI	3.955
No informa	30
Intersexual	1
Total	8.803.836

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2019)

Las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia representan el 50,11% del total de la población víctima, mientras que los hombres representan el 49,83%. La población víctima LGBTI que abiertamente ha registrado su orientación sexual representa el 0,04%. Ahora bien, considerando que las víctimas en su mayoría son mujeres, aún cuando en delitos

como homicidio o de desaparición forzada los hombres representan el mayor número de víctimas directas, es sobre las mujeres en quienes recae el impacto desproporcionado:

Los hechos de violencia han dejado huellas profundas y diferenciales en sus cuerpos y en su psiquis, han trastocado su cotidianidad y han alterado sustancialmente sus creencias y sus formas y proyectos de vida. Los testimonios de las mujeres evidencian que la violencia truncó sus proyectos al desestructurar sus familias y desterrarlas de lugares donde sustentaban su existencia, realizaban sus labores y proyectaban su futuro. Estos proyectos se vieron afectados en el momento en que les arrebataron la posibilidad de decidir sobre el curso de sus vidas y en el que fueron obligadas a cambiar de roles, oficios y actividades. Los relatos de las mujeres muestran que sus vidas transcurrían en escenarios caracterizados por relaciones patriarcales que les imponían fuertes grados de control, dominación y violencia por parte de padres, hermanos y esposos. Sin embargo, la violencia política se sumó de manera dramática a su situación y vulneró los espacios asumidos por las mujeres como propios y definitorios de sus vidas. Los repertorios de violencia contra las mujeres lesionaron aquello que para ellas resultaba valioso y significativo. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p.305)

Tras realizar un proceso de consulta con expertos académicos, instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales de carácter nacional e internacional, la Corte Constitucional colombiana estableció, desde el año 2008, diez riesgos y vulnerabilidades específicos que afectan a las mujeres en situación de desplazamiento forzado, en tanto causas directas e inmediatas de dicho desplazamiento forzado (Corte Constitucional de Colombia, 2008).

El desplazamiento forzado categorizado como delito de lesa humanidad, ha sido uno de los mayormente registrados en el conflicto armado colombiano. Las razones son varias, entre ellas haber contado con un marco normativo desde el año 1997, con la expedición de la Ley 387, establecida para adoptar medidas para la prevención del desplazamiento forzado,

atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de las personas que se vieron obligadas a desplazarse internamente; por lo que millones de personas pudieron declarar estos hechos. Otra de las razones ha sido que el desplazamiento forzado se presenta como una consecuencia inmediata de la comisión de otros delitos, los cuales, muchas veces eran silenciados por miedo a represalias de los actores armados: torturas, violencia sexual, haber presenciado masacres, desaparición forzada de personas cercanas a las comunidades que se habitan, presencia constante de actores armados, amenazas, etc.

Otro riesgo específico que ha sido altamente documentado se relaciona con la violencia, explotación o abuso sexual en el marco del conflicto armado; constituyendo esta una transgresión directa a la humanidad, la integridad, vida, vínculos relacionales y otros derechos de las mujeres. El cuerpo de las mujeres ha sido usado como instrumento de guerra, como objeto. Para los actores armados el cuerpo es un objeto a poseer, de tal forma que se envía a la víctima y a sus allegados el mensaje de poder y dominación que este pretende instalar sobre un territorio o población, así como sobre todo aquello que sea considerado anexo o extensión del mismo.

El Centro de Memoria Histórica pudo establecer 15 modalidades de violencia sexual con ocasión del conflicto armado. Estas son: A) Violación. B) Esclavitud sexual. C) Acoso sexual. D) Tocamientos. E) Desnudez forzada. F) Aborto forzado. G) Amenaza sexual. H) Empalamiento. I) Obligar a presenciar la violencia sexual ejercida contra otra persona. J) Obligar a realizar actos sexuales sobre el victimario u otra persona. K) Prostitución forzada. L) Mutilación de órganos sexuales. M) Prostitución infantil. N) Trata de personas con fines de explotación sexual. O) Pornografía infantil.

Este informe describe la violencia sexual como otra forma de dominación de lo masculino asociado a los actores armados, por encima de los cuerpos de las mujeres y de las mismas comunidades, en tanto representación social de lo femenino, de tal forma que la

violencia sexual es utilizada como práctica de castigo hacia todo aquello que difiera de sus órdenes sociales, estableciendo con ella climas de terror entre las poblaciones para llevar a cabo sus prácticas de dominación y control territorial (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

De igual manera, el informe realizó un análisis de las diferentes formas de violencia sexual utilizadas por los actores armados, con base en los significados que estos otorgaron al cuerpo de las mujeres en tres escenarios del conflicto: escenario de disputa territorial, escenario de control territorial y escenario intrafilas. Así, el cuerpo de las mujeres entendido como una extensión del territorio para ejercer prácticas regulatorias, ha sido objeto de diferentes repertorios violentos. En la siguiente tabla se describen dichos significados otorgados al cuerpo de las mujeres dentro cada escenario del conflicto armado:

Tabla 2

Significados otorgados al cuerpo de las mujeres por los actores armados en los escenarios del conflicto armado colombiano para ejercer sobre ellas violencia sexual

Escenario	Significado
Disputa Territorial	Cuerpos estigmatizados
	Cuerpos incómodos
	Cuerpos de las adversarias
Control Territorial	Cuerpos apropiables
	Cuerpos corregibles
	Cuerpos higienizados
Intrafilas	Cuerpos disciplinados bajo vigilancia
	Cuerpos para la guerra
	Cuerpos disponibles

Recuperado de Centro Nacional de Memoria Histórica (2017).

Por otra parte, se encuentra el riesgo de las mujeres de padecer explotación o esclavitud para ejercer labores domésticas y roles considerados como femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales. En zonas controladas por los diferentes grupos armados en Colombia, ser mujer y ser pobre representa una doble vulnerabilidad, desde el imaginario machista, para que sus cuerpos sean apropiados y esclavizados con fines de servicios sexuales y domésticos. El Centro Nacional de Memoria Histórica reconoce que la esclavitud sexual y las violaciones sexuales no tuvieron límites de edad, ejerciéndose de forma sistemática y masiva hacia grupos de mujeres pobres que habitaban zonas rurales dominadas por uno u otro actor armado. En muchas ocasiones, estas formas de violencia y esclavitud sexual no sólo fueron cometidas por los armados, sino que tuvieron también el soporte y la aquiescencia de la mente patriarcal de los no armados, que hacían las veces de empleadores de las mujeres (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017).

Existe también el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas, así como de otro tipo de amenazas contra ellos; riesgo este que se ve agravado en casos de mujeres cabeza de familia. Miles de mujeres en medio del conflicto armado han padecido el reclutamiento forzado propio o de sus hijos e hijas. Algunas que se opusieron, sufrieron amenazas y tuvieron que salir desplazadas del territorio que habitaban junto con sus hijos e hijas.

Se han evidenciado también los riesgos derivados del contacto familiar, afectivo o personal, sea este voluntario, accidental o presunto, con los integrantes de alguno de los grupos armados ilegales que operan en el país, principalmente por señalamientos o retaliaciones efectuados por los bandos enemigos. Una práctica sistemática de formas de tortura, desaparición forzada, homicidio y violencia sexual fue empleada por diferentes actores armados contra las mujeres de quienes se presumía o se tenía información real o falsa de tener algún vínculo afectivo ó sanguíneo con actores armados del grupo contrario,

extendiendo la connotación de “enemigo” a las mujeres y sus cuerpos (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2009).

Están igualmente los riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales y comunitarias o de sus labores de liderazgo y promoción de los derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado. En gran parte del territorio rural colombiano y particularmente en aquellas zonas con expresiones presenciales del conflicto armado, el papel de las mujeres ha sido determinante ante el abandono estatal. Cientos de mujeres se han organizado aportando a la reconstrucción del tejido social, apoyando a otras mujeres y hombres víctimas, en la documentación de sus casos; han promovido la visibilización de las violaciones de los Derechos Humanos y de las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, se han resistido a la explotación de los recursos naturales por empresas transnacionales del sector minero o energético y han sido red de apoyo fundamental para continuar en medio de tanta adversidad. Todo ello las expone de manera significativa. Aunque los hombres líderes y defensores de Derechos Humanos también se ven expuestos a amenazas, esta capacidad que representa el rol de las mujeres, las hace mayormente vulnerables (Corte Constitucional de Colombia, 2008).

Otro riesgo es el derivado de las estrategias de control coercitivo del comportamiento público y privado de las personas, implementadas por los grupos armados ilegales en extensas áreas del territorio nacional. Las formas de imposición de los órdenes sociales de los actores armados han impactado diferencialmente en las mujeres, trastocando algunas características construidas cultural y socialmente en varias regiones del país en torno a “lo femenino”. En la imposición de estrategias de control utilizadas por los actores armados contra la población civil, han determinado la forma de vestirse de las mujeres, sus horarios de salida, sus manifestaciones de afectividad, así como su orientación sexual; castigando con violencia sexual y otras formas de tortura las transgresiones a sus órdenes impuestos. Castigar

las transgresiones mediante la exacerbación de formas patriarcales pre-existentes fue uno de los repertorios de violencia ejercidos sobre las mujeres para controlar no sólo sus roles sociales sino hasta lo más íntimo de su vida privada.

Se presenta además el riesgo por el asesinato o la desaparición de su proveedor económico. En la historia del conflicto armado colombiano han prevalecido los roles tradicionales y patriarcales asociados al ser hombre y al ser mujer. En este sentido, la dependencia económica, social y hasta emocional de las mujeres hacia los hombres en sus familias, con independencia del tipo de estructura familiar que se tuviera, ha sido constante. Por ello, a pesar de que la mayoría de las víctimas directas de homicidio y desaparición forzada son hombres, es justamente la dependencia económica y social la que pone a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad, pues estos delitos han recaído sobre sus esposos, hijos, padres o hermanos, obligándolas a transformar sus roles sociales y económicos como mujeres, en medio de los daños morales, psico-emocionales, socio-culturales, materiales y al proyecto de vida que implican los delitos en sí mismos y las transformaciones en sus trayectorias de vida derivadas de los hechos de violencia. Son las mujeres de las familias quienes en su mayoría buscan a sus familiares desaparecidos y gestionan todos los procedimientos judiciales y administrativos que implica la desaparición (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017).

Se adiciona el riesgo de que las mujeres sean despojadas de sus tierras y su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales. Debido a la tradición y cultura patriarcal, las mujeres rurales así como en general la mujer en Colombia, no ha tenido una trayectoria histórica de propiedad sobre la tierra. Su relación con la tierra siempre ha estado volcada hacia el trabajo agrícola y agropecuario y, aunque haya sido heredera de propiedades, hasta hace relativamente pocos años, sus bienes eran jurídicamente administrados por los hombres del hogar fueran estos sus esposos, padres hermanos u otros (Defensoría del Pueblo,

2014). En línea con esta situación, Magdala Velázquez (2002), en un profundo análisis realizado sobre las mujeres y la propiedad, ha señalado la existencia de una inseguridad jurídica de las mujeres respecto a la propiedad de la tierra, lo cual las ha hecho más vulnerables a ser despojadas de sus bienes por parte de los actores armados. La situación no es menos compleja cuando sus esposos, padres o hermanos han sido asesinados o son desaparecidos, pues los trámites administrativos para ejercer la propiedad real sobre la tierra se tornan excesivos.

Se tienen los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrocolombianas. De las 4.412.041 mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia, 415.116 se autoreconocen como negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras; 111.854 como indígenas y 15.458 como gitanas. Pese al reconocimiento de derechos colectivos que constitucionalmente tienen los grupos étnicos en Colombia, las minorías étnicas han sido mayormente vulnerables, y dentro de ellas las mujeres, a sufrir la barbarie de la guerra por múltiples razones; algunas de ellas, su ubicación en territorios ricos en minerales, agua, tierras fértiles, zonas estratégicamente ubicadas para construir sobre ellas, corredores para el comercio de armas y drogas ilícitas. Otra de las razones por las que se hallan mayormente expuestas estas mujeres tiene que ver con su defensa unánime y colectiva del territorio, en oposición a la extracción masiva de recursos naturales, a lo que se adiciona la discriminación y exclusión social que han tenido tradicional e históricamente.

Finalmente se ha identificado el riesgo por la pérdida o ausencia de su compañero o proveedor económico durante el proceso de desplazamiento. Las transformaciones abruptas que genera el desplazamiento forzado, a causa del conflicto armado, expone a graves daños psicosociales individuales, familiares y comunitarios. En estos tres niveles la noción de identidad individual, familiar y comunitaria se ve seriamente removida. Las personas

desplazadas se ven obligadas a habitar territorios extraños y ajenos a sus usos y tradiciones sobre los cuales habían edificado sus identidades. La economía de las familias se ve desmejorada, pues las personas tienen que abandonar las actividades económicas que venían desempeñando, abandonando en la mayoría de los casos sus tierras y demás bienes para iniciar actividades para las que no estaban preparados ni emocional ni técnicamente. La mayoría de las víctimas en Colombia son personas pobres, quienes al verse desplazadas se exponen a constantes tensiones en su cotidianidad por los cambios abruptos y las exigencias de adaptación que los nuevos territorios, en los que se ven obligadas a habitar, les demandan. Ello exacerba los conflictos intrafamiliares, desencadenando en cientos de miles de casos la disolución del vínculo entre las parejas, o el debilitamiento del mismo por la separación forzada a la que se ven expuestos, derivando en una vulnerabilidad emocional y económica que recae desproporcionadamente sobre las mujeres, quienes además de afrontar los duelos propios de las separaciones, asumen las cargas económicas y deben ejercer múltiples roles dentro del sistema familiar.

Como se observa, estos 10 riesgos no se presentan de manera aislada. Entre ellos dos o más pueden estar interconectados, haciendo que mujeres y niñas vivencien de manera diferenciada y desproporcionada tanto causas como efectos del conflicto armado.

5.3.3 Estructura de la comisión y mandato

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición – CEV- por sus siglas, hace parte de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que se estableció en el Punto 5 del Acuerdo Final firmado entre el Gobierno Nacional y la ex-guerrilla de las FARC-EP. Fue creada por el acto legislativo 01 de marzo de 2017 y organizada mediante decreto ley 588 del 05 de abril de 2017. Su vigencia es de 3 años desde el inicio de funciones, es decir hasta noviembre de

2021, periodo en el que deberá entregar su informe, de acuerdo con los objetivos que le fueron encomendados.

La CEV tiene tres objetivos: 1. Contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, particularmente de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto en niños, niñas, adolescentes y la violencia basada en género, entre otros. 2. Contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas y como sujetos políticos; promover el reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas y el reconocimiento de la sociedad de las violaciones e infracciones y 3. Promover la convivencia en los territorios que consiste en la creación de una cultura que permita la resolución pacífica de conflictos y el respeto en el ejercicio de la democracia (República de Colombia, 2017). La CEV está enfocada en la dignificación y reconocimiento de las víctimas y en la garantía de los derechos de la sociedad colombiana a la Verdad, a la Memoria y, en consecuencia a la Convivencia y a la No Repetición.

La CEV se conformó por 11 integrantes. Su presidente, 5 hombres delegados como comisionados y 5 mujeres delegadas como comisionadas, todos y todas representantes de diferentes sectores de la sociedad: iglesia, campesinos, indígenas, mujeres, víctimas, periodistas, fuerzas armadas, entre otros.

Desde noviembre de 2018 inició como tal su funcionamiento, contando con que el decreto que la creó le permitía invertir 6 meses en su alistamiento. Así, desde que inició labores, conformó una estructura que le permite estar en los territorios mayormente afectados por el conflicto armado colombiano, contando con 12 sedes distribuidas geográficamente, así (República de Colombia. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2019):

- Antioquia y Eje cafetero

- Caribe insular
- Pacífico
- Territorios étnicos
- Centroandina
- Surandina
- Amazonía
- Orinoquía
- Bogotá y Soacha
- Nororiente
- Magdalena medio
- Internacional

Su marco conceptual se sustenta sobre 8 enfoques, a saber:

- Enfoque étnico
- Enfoque de género
- Enfoque psicosocial
- Dimensión cultural
- Niñas y niños
- Jóvenes
- Persona mayor
- Discapacidad

5.3.4 Elementos psicosociales

5.3.4.1. Disposición de equipos psicosociales para la recolección de testimonios

La CEV ha dispuesto un equipo psicosocial para implementar estrategias de apoyo en la escucha de testimonios individuales y colectivos de las víctimas, responsables y testigos que están aportando al esclarecimiento de la verdad sobre el conflicto armado colombiano.

En cuanto al enfoque psicosocial, este es definido por la CEV (República de Colombia. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2019) como una forma de acompañamiento:

“El acompañamiento psicosocial es una forma de relación para apoyar el proceso de participación en la Comisión de la Verdad, que se basa en la escucha y el reconocimiento de la singularidad de las experiencias y testimonios de los/as participantes. Favorece un contexto de confianza, apoyo emocional y reflexivo, que contribuya al esclarecimiento de la verdad, el cuidado y a que la experiencia de compartir el testimonio tenga sentido en sus vidas.

Se entiende como un proceso (antes, durante y después) que involucra tanto del diseño de las acciones -teniendo en cuenta la situación de las víctimas y responsables-; la preparación previa y el apoyo durante el desarrollo de las actividades-acciones; y el seguimiento y valoración de los efectos de la participación. Debe cuidar y abordar: la movilización emocional; el significado de los hechos o impactos traumáticos vividos; la construcción de las narrativas y los testimonios; y las formas de resignificación, simbólicas y de refuerzo del tejido social y la convivencia”.

5.3.5 Elementos de género dispuestos en la CEV

Desde su mandato mismo, la CEV tiene la responsabilidad de tener en cuenta las experiencias, el impacto diferencial y las condiciones particulares de personas, poblaciones o sectores en condición de discriminación, con especial atención en la victimización sufrida por las mujeres (República de Colombia, 2017). Para recoger la experiencia como víctimas del conflicto armado por parte de mujeres y población LGBTI, la CEV ha venido desarrollando un proceso de articulación directa con Organizaciones defensoras de los Derechos de las Mujeres de carácter nacional e internacional (República de Colombia. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2019), así como con organizaciones LGBTI en el país:

“La Comisión de la Verdad fortalece la implementación del enfoque de género en las territoriales Cauca, Nariño y Meta gracias al proyecto ‘Fortalecimiento Institucional del Enfoque de Género de la Comisión de la Verdad en tres departamentos’. El plan, apoyado por ONU Mujeres e implementado por la Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP), propulsó la contratación de tres documentadoras especializadas en temas de género.

La territorial Cauca contará con una psicóloga que trabajó en la formación de documentadoras de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del cauca, en el liderazgo de procesos del Consejo Comunitario Cuenca del Río Agua Blanca - Alsacia y en proyectos para el fortalecimiento de la resiliencia con niños y niñas. Esta persona fortalecerá el enfoque de género desde la documentación.

Asimismo, una psicóloga con experiencia en la implementación de proyectos de cooperación internacional, acompañamiento en la activación de rutas para la prevención y atención a víctimas de las violencias sexuales, formación y capacitación

a funcionarios y funcionarias en temas de salud, justicia y protección, será la documentadora especializada en enfoque de género en la territorial Nariño.

Mientras que la territorial Meta contará con una licenciada en pedagogía infantil con experiencia en organizaciones de mujeres, en la implementación del Acuerdo final de La Habana y en temas de género y atención al público”.

En cuanto al enfoque de género, la CEV (República de Colombia. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2019) lo define como:

“El enfoque de género en el trabajo de la Comisión de la Verdad es una herramienta de análisis que reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado en la vida de las mujeres y las niñas en consecuencia de la violencia que los actores armados ejercieron contra ellas en razón de su género; así como en la vida de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en razón de su orientación sexual e identidad de género. En ese sentido, la Comisión incorpora el enfoque de género como un elemento transversal en todo su ámbito de trabajo y contempla entre sus funciones la creación de un grupo de trabajo de género que contribuye con tareas de carácter técnico, de investigación, preparación de encuentros de la verdad con enfoque de género, así como la coordinación con organizaciones y plataformas de mujeres, de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. Evidenciar las formas diferenciales en que el conflicto afectó a las personas en razón de su género, orientación sexual e identidad de género es punto de partida para la implementación de medidas que restituyan sus derechos, esclarezcan los patrones de violencia a las que fueron expuestas, promueva su reconocimiento, la responsabilidad de los perpetradores, visibilice los mecanismos que construyeron cotidianamente y que apostaron a la construcción de la paz de manera permanente en los territorios. En este

análisis, la Comisión tendrá en cuenta el trabajo ya abordado por organizaciones y movimiento de mujeres que estudiaron el conflicto armado y sus impactos concretos en mujeres, niñas y personas LGBTI, desde su diversidad multiétnica y pluricultural”.

6. Análisis Transversal

Desde el enfoque de género se identifican elementos similares entre los tres casos de comisiones de la verdad analizados: Perú, Paraguay y Colombia. Es así como las tres comisiones han tenido consideraciones similares en cuanto a los impactos diferenciados y desproporcionados sobre las mujeres y niñas en razón a los conflictos armados de Perú y Colombia y la dictadura totalitarista que tuvo Paraguay.

Ahora bien, en cuanto a la arquitectura institucional para transversalizar el enfoque de género al interior y exterior de las comisiones, Perú y Colombia han dispuesto estos equipos específicos con la intención de que el enfoque se ponga en diálogo con el análisis que realiza el resto del personal de las comisiones, pero también en clara articulación con los movimientos de mujeres y personas con identidades de género y orientaciones sexuales no hegemónicas tanto en Perú como en Colombia. A diferencia de ello, la CVJ de Paraguay, si bien, realizó un análisis de los impactos diferenciados que el régimen implicó en las mujeres, no dispuso de un equipo específico que transversalizara el enfoque con los demás integrantes de la comisión, ni tampoco da cuenta de un proceso participativo con el movimiento de mujeres, en clave de enriquecer este análisis.

Se observa una intención política y social en los tres casos analizados, por visibilizar los impactos diferenciados que tanto los conflictos armados peruano y colombiano como la dictadura de Paraguay han generado en las mujeres. Uno de los mecanismos utilizados ha sido el desarrollo de audiencias públicas temáticas específicas sobre mujeres. El caso de la CVR del Perú deja ver que realizó una audiencia pública sobre mujeres en Lima, de igual

forma, la CVJ de Paraguay también llevó a cabo una y recientemente la CEV de Colombia, en junio de 2019, desarrolló su primera audiencia pública, la cual fue dedicada a visibilizar la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado colombiano. Esta apuesta incide claramente en la similitud de los informes finales de las comisiones de la verdad del Perú y Paraguay, que presentaron capítulos específicos tanto sobre los impactos diferenciados de las violencias armadas y dictatoriales sobre las mujeres y niñas, como específicamente capítulos que narran las formas de violencia sexual contra estas poblaciones. Ahora bien, la CEV en Colombia está en plena etapa de implementación de su mandato, pero la apuesta específica por visibilizar las violencias contra mujeres y niñas y el hecho de que su primera audiencia pública se haya dedicado al tema de violencia sexual, deja ver que en su informe final con seguridad tendrá un capítulo enfocado a esta temática.

Como particularidad del caso colombiano, aunque la CEV está iniciando su mandato, el país ya cuenta con una amplia trayectoria en términos de análisis diferenciado del impacto del conflicto armado colombiano sobre las mujeres y niñas, así como sobre poblaciones LGBTI, gracias a la incidencia del movimiento de mujeres que ha logrado que se expida jurisprudencia al respecto. De igual forma los procesos investigativos de memoria histórica documentados por el Centro Nacional de Memoria Histórica, enriquecen esta comprensión desde un enfoque de género.

Desde el campo psicosocial, las tres comisiones de la verdad dispusieron (casos Perú y Paraguay) y han dispuesto (caso Colombia), equipos psicosociales específicos para realizar acompañamiento y contención emocional a las víctimas y testigos, durante la recolección de testimonios privados o en audiencias públicas.

En cuanto al análisis de los daños psicosociales y psicológicos generados por los hechos de violencia, la CVR del Perú es emblemática por su especificidad y riqueza en la descripción, considerando no sólo daños individuales, sino también familiares y comunitarios

en razón a delitos específicos como la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la violencia sexual, las masacres, los homicidios, etc. Adicionalmente el caso peruano, refiere daños propios a la identidad cultural, considerando que la mayoría de las víctimas del conflicto armado peruano son quechua hablantes.

El caso del CVJ del Paraguay explicita algunas particularidades del daño psicológico derivado de la tortura y violencia sexual, así como la represión misma, y enfoca su análisis mucho más en el nivel individual y familiar.

El caso colombiano como se ha referido es diferente pues la CEV está en su primero de tres años de implementación. Así que su fase actual es de documentación. No obstante es importante mencionar que Colombia cuenta con una amplia trayectoria de experiencias previas de construcción de verdad y memoria histórica, así como de documentos técnicos elaborados por instituciones del Sistema de Atención y Reparación a Víctimas que servirán a la CEV como elementos para enriquecer el análisis de los impactos, desde un enfoque psicosocial.

Finalmente, los informes finales de las comisiones de la verdad, de Perú y Paraguay, plantearon recomendaciones específicas en materia de Rehabilitación del daño psicosocial y psicológico, ordenando la creación de Programas Integrales, adscritos a los Ministerio de Salud, para actuar desde su deber de reparar dichos daños. Ahora bien, el caso colombiano, aunque como se ha mencionado esté en plena etapa de implementación de su comisión de la verdad, es muy similar en este sentido, si se considera la particularidad de que Colombia tiene una Política de Atención y Reparación a Víctimas desde el año 2011, en la cual se ha creado el Programa de Atención y Reparación Psicosocial y Salud Integral a las víctimas del conflicto armado, bajo la dirección del Ministerio de Salud y Protección Social de este país (Ministerio de Salud y Protección Social, 2017). Es decir, la CEV ya tendrá una instancia que

pueda responder por sus recomendaciones en esta materia, cuando allegue al país su informe final.

7. Conclusiones

11 de los 62 casos de comisiones de la verdad y otros mecanismos de investigación de verdad histórica, en el marco de la Justicia Transicional que hicieron parte del corpus de esta investigación, han tenido enfoque psicosocial. La primera fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Chile en 1990.

La narración que se produce con el testimonio, ayuda a las víctimas a organizar su experiencia y particularmente a encontrarle sentido a las emociones que han devenido y que en muchos casos durante mucho tiempo han estado silenciadas, pero la narración no es en sí misma una analogía de la experiencia.

En línea con lo anterior, el testimonio que se brinda en las comisiones de la verdad puede tener efectos favorecedores para lograr la desprivatización del sufrimiento, en tanto la experiencia, que es más que la narrativa del testimonio, sea acogida y validada. No obstante, los daños psicológicos y psicosociales, producidos por las graves violaciones a los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, requieren un proceso de atención a medio y largo plazo que tenga carácter rehabilitador y no se logran abordar en su totalidad, con el acompañamiento psicosocial del que se dispone para mitigar los impactos emocionales que implica rendir testimonio.

La idea anterior permite comprender los resultados de investigaciones realizadas en Chile y Sudáfrica. En Chile por ejemplo, la valoración positiva de la implementación de sus dos comisiones de la verdad, se ubicó en el nivel social, en la medida en que ha permitido develar las graves violaciones que se cometieron en el pasado, disponer de otros mecanismos

para fortalecer procesos sociales y organizativos de exigibilidad frente a la aplicación de justicia. Pero ello, no necesariamente se tradujo en un bienestar a nivel individual para las víctimas directas, pues los resultados arrojaron que las víctimas re-experimentaron un clima emocional negativo durante su participación. En forma similar, los estudios realizados con posterioridad a la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica demostraron que haber participado bien en audiencias privadas, públicas o no haberlo hecho, no constituyó cambios significativos en las víctimas en términos de reducción de sintomatología clínica como estrés postraumático, ansiedad, ni tasas de depresión. No obstante la disposición del clima social hacia la reconciliación nacional fue ampliamente influido por la visibilización que tuvo la CVR de Sudáfrica.

Existen continuidades y discontinuidades importantes entre la violencia social de género y la violencia de género vinculada a conflictos armados o dictaduras que de no ser tratados explícitamente y revelados a las sociedades, pueden ser opacados, silenciando el impacto social y contribuyendo a su prolongación en los tiempos sociales, más allá de los tiempos que tienen en sí mismos los conflictos armados o las dictaduras. Estas vulnerabilidades específicas que ponen en mayor riesgo de victimización a ciertas poblaciones por sus características identitarias como el género, la orientación sexual, la edad, la pertenencia étnica y que se ven soportadas por órdenes sociales e ideológicos propios de sistemas patriarcales, requieren ser develados por las comisiones de la verdad si se quiere deconstruirlos, con recomendaciones específicas para su abordaje a cargo de los Estados responsables.

Estas formas de violencia históricamente legitimadas hacia las mujeres, imprimen una cuota de silencio y marginación de sus afectaciones directas, creando tendencias en los testimonios dados por las mujeres, en cuanto priorizan los abusos cometidos contra sus familiares y ponen en segundo lugar o invisibilizan las afectaciones sufridas en primera

persona como mujeres. Esto se evidenció en los informes de las comisiones de la verdad de Perú, Paraguay, Timor del Este, Sudáfrica y Guatemala.

Los contextos culturales invitan a pensar la categoría de género en intersección con otras categorías identitarias como la pertenencia étnica, la edad o la clase social, a efectos de considerar los impactos diferenciados que los conflictos armados y las dictaduras imprimen sobre las mujeres y niñas; considerando no sólo las afectaciones propias de las diferentes formas de violencia sexual, sino también dando lugar a otras experiencias que recaen de manera diferenciada sobre estas poblaciones.

Los casos del conflicto armado peruano y de la dictadura paraguaya, muestran una mayor linealidad que facilita tener una comprensión temporal de las violencias allí acontecidas, con una mayor precisión en cuanto a sus inicios y final. Así, se observa una secuencia lineal entre la terminación de la guerra y la dictadura, y las creaciones de sus respectivas comisiones de la verdad, con las emisiones de sus informes finales y sus recomendaciones en materia de Reparación. Estos elementos de mayor linealidad facilitan a la sociedad, a la institucionalidad y a las víctimas directas comprender esta nueva arquitectura institucional de una forma si se quiere “ordenada” en términos de un antes y un después del conflicto o la dictadura. Ello difiere significativamente en el caso colombiano, donde pese a que desde hace aproximadamente 14 años se vienen implementando mecanismos de justicia transicional, desde hace 7 años se implementa una política de Atención y Reparación a las víctimas y desde hace 3 años se viene implementando con una serie de dificultades el Acuerdo de Paz firmado con una de las guerrillas, el conflicto armado continúa, con claras expresiones de guerra en unas regiones más que en otras, con diferentes actores armados, haciendo complejo para la psique, un antes y un después que invite a sanar y abra las puertas genuinas de apuestas por una reconciliación nacional.

8. Bibliografía

- Aminstía Internacional. (2010). Comisionar la Justicia. Las comisiones de la verdad y la justicia penal . (A. Internacional, Ed.) Madrid, España.
- Aminstía Internacional (2010). *Comisionar la Justicia. Las comisiones de la verdad y la justicia penal* . Madrid: Amnistía Internacional.
- Beristáin, C., Páez, D., Rimé, B., & Kanyangara, P. (2010). Efectos psicosociales de la participación en rituales de justicia transicional. (U. C. Perú, Ed.) *Revista de Psicología* , 28 (1).
- Beristáin, C., Páez, D., Rimé, B., & Kanyangara, P. (2010). Efectos psicosociales de la participación en rituales de justicia transicional. *Revista de Psicología*, 28 (1), 9-35.
- Cárdenas, M., Páez, D., & Rimé, B. (2013). El impacto psicosocial de los procesos transicionales en Chile: evaluación de los efectos de las Comisiones Nacional de “Verdad y Reconciliación” y “prisión política y tortura”. (F. I. Aprendizaje, Ed.) *Revista de Psicología Social* , 2 (28), 145-156.
- Cárdenas, M., Páez, D., & Rimé, B. (2013). El impacto psicosocial de los procesos transicionales en Chile: evaluación de los efectos de las Comisiones Nacional de “Verdad y Reconciliación” y “prisión política y tortura”. *Revista de Psicología Social* , 2 (28), 145-156.
- Castilla, J. (2015). Reconciliación de Malí; Mayo en Kidal, Inflexión en la segunda fase del proceso. (U. C. Madrid, Ed.) *UNISCI Discussion Papers* (37), 147-175.
- Ceballos, M. (Enero de 2002). El papel de las comisiones extrajudiciales de investigación y de las comisiones de verdad en los procesos de paz. Aspectos teóricos y experiencia internacional. (D. N. Colombia, Ed.) Bogotá.

Centro Internacional para la Justicia Transicional - ICTJ -. (11 al 15 de Marzo de 2013).

Curso Internacional sobre Comisiones de la Verdad . (C. I. ICTJ, Ed.) Villa de Leyva, Boyacá, Colombia.

Centro Internacional para la Justicia Transicional - ICTJ -. ¿Qué es la Justicia Transicional?

(2019). ICTJ. Justicia, Verdad, Dignidad. (ICTJ, Productor, & International Center for Transitional Justice) Recuperado el 04 de Junio de 2019, de <https://www.ictj.org/es/que-es-la-justicia-transicional>

Centro Internacional para la Justicia Transicional y Fundación Kofi Annan. (Febrero de 2015). (O. G. Ltda., Ed.) Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2009). La masacre de El Salado: Esa guerra no era nuestra. Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá: Taurus.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. Memoria Histórica, Centro Nacional de Memoria Histórica, Grupo de Memoria Histórica, Bogotá.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2015). Aniquilar la Diferencia. Lesbianas, gays, bisexuales y transesteristas en el marco del conflicto armado colombiano. Bogotá.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). La guerra inscrita en el cuerpo. Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado. Bogotá.

Chile. Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación . (1991). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Volumen I. Tomo 2. Memoria Histórica, Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago.

Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil y Centro Internacional para la Justicia Transicional. (2013). (E. González, V. Howard, Edits., & E. d. Colombia, Trad.) Brasilia, Brasil.

Comisión de la Verdad de Ecuador. (2010). Informe de la Comisión de la Verdad de Ecuador.

Tomo 1 Violaciones de los Derechos Humanos. Comisión de la Verdad de Ecuador.

Quito: Ediecuatorial.

Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay. (2008a). *Síntesis y Caracterización del Régimen. En Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay. Informe Final Anive Haguã Oiko. (Tomo I)*. Asunción, Paraguay: Comisión de la Verdad y la Justicia.

Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay. (2008b). *Las violaciones de derechos de algunos grupos en situación de vulnerabilidad y riesgo. Informe Final. Anive Hagua Oiko. (Tomo III)*. Asunción, Paraguay: Comisión de la Verdad y la Justicia.

Comisión de la Verdad y la Justicia de Paraguay. (2008c). *Las secuelas de las violaciones de derechos humanos. La experiencia de las víctimas. Informe Final. Anive Hagua Oiko. (Tomo IV)*. Asunción, Paraguay: Comisión de la Verdad y la Justicia.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú. (2003a). *Introducción. Informe Final. (Tomo I. Primera parte)*. Lima, Perú: Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú. (2003b). *Violencia Sexual contra la Mujer. Informe Final. (Tomo VI. Capítulo 1.5)*. Lima, Perú: Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú. (2003c). *Las secuelas psicosociales. Informe Final. (Tomo VIII. Tercera Parte. Capítulo 1)*. Lima, Perú: Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú. (2003d). *Recomendaciones de la CVR hacia un compromiso nacional por la reconciliación. (Tomo IX. Capítulo 2.2)*. Lima, Perú: Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Perú. (2003e). *Segunda Parte. Los factores que hicieron posible la violencia. El impacto diferenciado de la violencia (Tomo VIII. Capítulo 2.1)*. Lima, Perú: Comisión de la Verdad y la Reconciliación.

Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. (2015). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Memoria Histórica, Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, Bogotá D.C.

Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (2004). Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Memoria Histórica, Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Santiago.

Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (1999). Guatemala, memoria del silencio. Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Ciudad de Guatemala: Talleres de Litoprint.

Commission of Inquiry: Algeria. (16 de Marzo de 2011). Recuperado el 01 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2003/09/commission-inquiry-algeria>

Commission of Inquiry: Brazil: No More (Brasil: Nunca Mais). (01 de Enero de 1979). Recuperado el 01 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/1979/01/commission-inquiry-brazil>

Congreso de la República de Colombia. (10 de Junio de 2011). Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia.

- Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de Chile. (1996). Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tomo I. Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación de Chile. Santiago: Andros Impresores.
- Corte Constitucional de la República de Colombia. (14 de Abril de 2008). Auto 092 del 2008. Protección de los Derechos Fundamentales de las Mujeres Víctimas del Desplazamiento Forzado por causa del conflicto armado en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional declarado en la Sentencia T-025 de 2004. Bogotá D. C., Cundinamarca, Colombia.
- Dalle, P., Boniolo, P., Sautu, R., & Elbert, R. (2005). *Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. Buenos Aires, Argentina: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Defensoría del Pueblo. (2014). *El conflicto armado y el riesgo para la mujer rural Estudios de caso en los departamentos de Chocó, Córdoba, Santander y Caquetá. Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para la Prevención de Riesgos de Violaciones a los Derechos Humanos y el DIH. Sistema de Alertas Tempranas SAT*. Bogotá: Torre Gráfica Limitada.
- Departamento Nacional de Estadística, DANE. (02 de 11 de 2018). Departamento Nacional de Estadística, DANE. Recuperado el 25 de 05 de 2019, de [dane.gov.co: http://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/resumen-2da-entrega-CNPV-preliminar.pdf](http://www.dane.gov.co/files/censo2018/informacion-tecnica/resumen-2da-entrega-CNPV-preliminar.pdf)
- Díaz, I., y Molina, N. (2016). Comisiones de la Verdad en América Latina. La esperanza de un nuevo porvenir. *Revista Logos, Ciencia & Tecnología*, 7 (2), 19.

- Díez, M. y Mirón, M. (2004). Una paz femenina. En M. Molina y F. Muñoz: *Manual de Paz y Conflictos*, Granada: Universidad de Granada, 67-94.
- El Espectador. (2018). Recuperado el 28 de Septiembre de 2019, de Gran Atlas del Conflicto: https://www.elespectador.com/static_specials/350/atlas-introduccion/index.html
- Flick, U. (2007). *Introducción a la Investigación Cualitativa* (2ª edición ed.). (E. M. Galiza, Ed.) Madrid, España: Ediciones Morata y Fundación Paideia Galiza.
- Frieyro de Lara, B., y Robles, M. (2012). La integración de la perspectiva de género en el análisis de los conflictos armados y la seguridad. Cuadernos de Estrategia (157), 53-81.
- Gobierno de Colombia. (25 de Abril de 2018). (ACTIVAMC, Editor, & P. Colombia, Productor) Recuperado el 26 de Mayo de 2019, de Colombia, Co: <https://bit.ly/2RV4PxM>
- Gómez, D. (2017). Trilogía para ser y caminar: memoria, verdad e historia en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Posibilidades y retos. Documentos de política (2).
- Gómez, J., Herrera, J., y Pinilla, N. (2010). Informe Final sobre los hechos del Palacio de Justicia. Universidad del Rosario, Facultad de Jurisprudencia. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario.
- Gonzalez, E., y Rojas, G. (2015). El papel de las Comisiones De La Verdad en los procesos de Reconciliación. Análisis de Ruanda, el Salvador y Perú al conflicto Colombiano. (U. M. Políticos, Ed.) Bogotá, Cundinamarca, Colombia.
- Grau, M. (Octubre de 2013). La memoria histórica, ¿activo transformador de la desigualdad de género? Análisis crítico del discurso del Centro de Memoria Histórica en Colombia

a partir de una mirada de género e interseccionalidad . (I. C. Pau, Ed.) Barcelona, España: Institut Català Internacional Per la Pau.

Hayner, P. (2006). Comisiones de la verdad: resumen esquemático. *International Review of the Red Cross* (862), 1-18.

Hayner, P. (2008). Verdades Innombrables. El reto de las comisiones de la verdad (1ª en español ed.). (F. d. Económica, Ed., & J. Cuéllar, Trad.) México D.F., México: Fondo de Cultura Económica.

<https://www.cverdad.org.pe/lacomision/nlabor/decsup02.php>

Ibáñez, J. (2014). Justicia transicional y las Comisiones de la Verdad (Primera ed.). (I. Berg, Ed.) Bogotá D.C., Bogotá D.C., Colombia: Instituto Berg.

ICTJ-Kofi Annan Foundation. (s.f.). Recuperado el 15 de Agosto de 2019, de Desafiando lo convencional: casos de estudio- Nepal: https://www.ictj.org/sites/default/files/subsites/challenging-conventional-truth-commissions-peace/nepal_es.html#01/4

Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. (2004). Recuperado el 10 de Septiembre de 2019, de Instituto Nacional de Derechos Humanos: <https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/455>

Jaramillo, J. (2010). Reseña de "Comisiones de la verdad: Guatemala, El Salvador y Sudáfrica, perspectivas para Colombia" de CEBALLOS, Marcela. *Co-herencia* , 7 (13), 295-301.

Jelín, E. (2012). ¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias? En E. Jelín, *Los trabajos de la memoria* (2ª ed., págs. 51-70). Lima, Perú: IEP Instituto de Estudios Peruanos.

Justicia Transicional. (2015). Justicia Transicional en Colombia. Recuperado el 24 de Abril de 2019, de <http://www.justiciatransicional.gov.co/Justicia-Transicional/Justicia-transicional-en-Colombia>

La comisión "Verdad, Justicia y Reconciliación de Togo". (2009). Recuperado el 30 de Agosto de 2019, de Reino de Marruecos Consejo nacional de los derechos Humanos: <https://www.cndh.ma/es/bulletin-d-information/la-comision-verdad-justicia-y-reconciliacion-de-togo>

Mantilla, J. (2006). La Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú y la perspectiva de género: principales logros y hallazgos. Revista IIDH (43), 323-365.

Millán Hernández, J. (2015). Comisiones de la verdad y posibles aprendizajes para el caso colombiano. Papel Político , 1 (20).

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú (11 de 2019). (P. M. Humanos, Productor) Recuperado el 02 de 11 de 2019, de Comisión Multisectorial de Alto Nivel. Quiénes Somos: <https://cman.minjus.gob.pe/quienes-somos/>

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Anexo Técnico Estrategia de Atención Psicosocial PAPSIVI. Marco conceptual para la atención psicosocial a víctimas de los delitos de reclutamiento ilícito, desaparición forzada, tortura y violencia sexual . (M. d. Social, Ed.) Bogotá, Cundinamarca, Colombia.

Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Estrategia de Atención Psicosocial a Víctimas del Conflicto Armado. Marco Conceptual. 1 . Bogotá, Cundinamarca, Colombia.

Molly, A. (2007). Pero si no he acabado...tengo más que contar: las limitaciones de las narraciones estructuradas de los testimonios públicos. (U. d. Andes, Ed.) Antípoda Revista de Antropología y Arqueología (4), 147-159.

Morote, H. (25 de Marzo de 2009). Verdad y Reconciliación en Sudáfrica (Un ejemplo para El Perú). (F. H. Morote, Ed.) Ayachucho, Perú.

Querejazu, I. (06 de Septiembre de 2018). La Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú: una introducción a su elaboración, a su Informe Final y a su recepción . (U. d. Vasco, Ed.) Bilbao, País Vasco, España.

Rebolledo, O., & Rondón, L. (2010). Reflexiones y aproximaciones al trabajo psicosocial. Revista de Estudios Sociales (36), 40-50.

Republic of Liberia. Truth and Reconciliation Commission. (19 de Diciembre de 2008). Volume Three: APPENDICES Title VIII: Accounting for the “Less Fortunate” and their Psychosocial Needs. Monrovia, Liberia.

Republic of Rwanda. National Unity and Reconciliation Commission. (Diciembre de 2016). Unity and Reconciliation Process in Rwanda. Kigali, Ruanda.

República de Colombia. (05 de Abril de 2017). Decreto 588 de 2017. Por el cual se organiza la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición. Bogotá D.C., Colombia.

República de Colombia. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (2019). Comisión de la Verdad. (l. C. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Productor) Recuperado el 03 de Noviembre de 2019, de <https://comisiondelaverdad.co/la-comision/que-es-la-comision-de-la-verdad>

República de Colombia. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. (16 de Octubre de 2019). Comisión de la Verdad. (C. d. Verdad, Productor) Recuperado el 02 de Noviembre de 2019, de <https://comisiondelaverdad.co/actualidad/noticias/la-comision-fortalece-el-enfoque-de-genero-en-las-territoriales-cauca-narino-y-meta>

Ruta Pacífica de las Mujeres. (2013). La Verdad de las Mujeres Víctimas del Conflicto Armado en Colombia. Resumen. Ruta Pacífica de las Mujeres. Bogotá: G2 Editores.

Ruta Pacífica de las Mujeres. (2013). La verdad de las mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia. Tomo II. Bogotá: Ruta Pacífica de las Mujeres.

Semana.com . (24 de Abril de 2019). (Semana.com, Editor, & Semana.com, Productor) Recuperado el 25 de Abril de 2019, de ¿Qué se sabe del exmilitante de las Farc asesinado en Catatumbo?: <https://bit.ly/2KW5Kvo>

Sierre Leone Truth & Reconciliation Commission. (2004). Report of the Sierra Leone Truth & Reconciliation Commission. Volume Two. Acra, Ghana.

Sierre Leone. Truth & Reconciliation Commission. (2004). Witness to Truth: Report of the Sierra Leone Truth & Reconciliation Commission. Vol 1. (Truth & Reconciliation Commission, Ed.) Accra, Ghana.

Truth and Reconciliation Commission. (1998). Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report. Truth and Reconciliation Commission.

Truth Commission Digital Collection. (16 de Marzo de 2011). Recuperado el 01 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2011/03/truth-commission-digital-collection>

Truth Commission: Democratic Republic of Congo. (16 de Marzo de 2011). Recuperado el 01 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2003/07/truth-commission-democratic-republic-congo>

Truth Commission: Ghana. (16 de Marzo de 2011). Recuperado el 01 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2003/01/truth-commission-ghana>

Truth Commission: Haiti. (1995). United States Institute of Peace. Recuperado el 13 de Octubre de 2019, de <https://www.usip.org/publications/1995/04/truth-commission-haiti>

Truth Commission: Honduras . (09 de Febrero de 2012). Recuperado el 15 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2012/02/truth-commission-honduras-2010>

Truth Commission: Kenya. (01 de Julio de 2009). Recuperado el 15 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2009/07/truth-commission-kenya>

Truth Commission: Liberia. (20 de Febrero de 2006). Recuperado el 15 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2006/02/truth-commission-liberia>

Truth Commission: Mauritius. (09 de Febrero de 2012). Recuperado el 10 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2012/02/truth-commission-mauritius>

Truth Commission: Morocco. (16 de Marzo de 2011). Recuperado el 01 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2004/12/truth-commission-morocco>

Truth Commission: Paraguay. (01 de Junio de 2004). Recuperado el 01 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2004/06/truth-commission-paraguay>

Truth Commission: Serbia and Montenegro. (01 de Febrero de 2002). Recuperado el 10 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2002/02/truth-commission-serbia-and-montenegro>

Truth Commission: Solomon Islands. (29 de Abril de 2009). Recuperado el 15 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2009/04/truth-commission-solomon-islands>

Truth Commission: South Korea 2005. (18 de Abril de 2012). Recuperado el 15 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2012/04/truth-commission-south-korea-2005>

Truth Commission: Timor-Leste (East Timor). (07 de Febrero de 2002). Recuperado el 10 de Septiembre de 2019, de United States Institute of Peace. Making Peace Possible: <https://www.usip.org/publications/2002/02/truth-commission-timor-leste-east-timor>

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2018). Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (U. p. Víctimas, Productor) Recuperado el 25 de Abril de 2019, de <https://bit.ly/2J54z7w>

Vargas, J., & Díaz, A. (2018). Enfoque de género en el acuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC-EP: transiciones necesarias para su implementación. Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, (39), 389-414.

Vasuki, N. (Julio de 2006). Comisiones de la Verdad y Género: Principios, políticas y procedimientos. 66. (C. I. Transicional, Ed.) New York, Estados Unidos: Centro Internacional para la Justicia Transicional.

Velásquez, M. (2002). Las Mujeres y la Propiedad. (B. d. República, Ed.) Credencial Historia (149).

Verdadabierta. (14 de Noviembre de 2012). El entrenamiento de Yair Klein a las Autodefensas del Magdalena Medio. (Verdadabierta.com, Editor, & Verdadabierta.com) Obtenido de <https://bit.ly/2HOJMqJ>

Verdadabierta. (19 de Febrero de 2018). Proceso de paz con las FARC. (Verdadabierta.com, Productor) Recuperado el 22 de Abril de 2019, de <https://bit.ly/30Vtbce>

Villellas, M. (2010). La participación de las mujeres en los procesos de paz: las otras mesas. . (I. C. Pau., Ed.) Barcelona.

Villellas, M. (2016). Mujeres, paz y seguridad. (I. E. Cano, Editor, & I. E. Cano, Productor) Recuperado el 30 de Abril de 2019, de <https://especiales.realinstitutoelcano.org/mujeres-paz-seguridad/>

Anexos

Anexo 1. Tabla de Unidades Analíticas y Publicaciones consultadas

Unidades analíticas y número de publicaciones documentadas	Títulos de las publicaciones halladas / Autores / Año
1. Comisiones de la verdad: 17	<p>1. Detrás del espejo. Los retos de las comisiones de la verdad/ Centro de Memoria, Paz y Reconciliación / 2014</p> <p>2. Desafiando lo convencional. ¿Pueden las comisiones de la verdad fortalecer los procesos de paz? (Centro Internacional para la Justicia Transicional y Fundación Kofi Annan, 2015)</p> <p>3. El papel de las Comisiones De La Verdad en los procesos de Reconciliación. Análisis de Ruanda, el Salvador y Perú al conflicto Colombiano (Gonzalez & Rojas, 2015)</p> <p>4. Reseña de "Comisiones de la verdad: Guatemala, El Salvador y Sudáfrica, perspectivas para Colombia" de Ceballos Marcela (Jaramillo, 2010)</p> <p>5. Comisiones de la Verdad y posibles aprendizajes para el caso colombiano (Millán Hernández, 2015)</p> <p>6. Materiales recomendados en el Curso Internacional sobre comisiones de la Verdad (Centro Internacional para la Justicia Transicional - ICTJ -, 2013)</p> <p>7. Comisiones de la verdad: resumen esquemático (Hayner P. , 2006)</p> <p>8. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú: una introducción a su elaboración, a su Informe Final y a su recepción (Querejazu, 2018)</p> <p>9. Verdad y Reconciliación en Sudáfrica (Un ejemplo para el Perú) (Morote, 2009)</p> <p>10. África y sus comisiones de la verdad y reconciliación / Centro Internacional para la Justicia Transicional / 2006</p>

	11. Reconciliación ¿A qué Costo? Los Logros de la Comisión de Verdad y Reconciliación / Alex Boraine / 2000
	12. Sudáfrica y la importancia de mejorar los argumentos para un debate público / Lucas Martín /2018
	13. Comisionar la Justicia. Las comisiones de la verdad y la justicia penal (Amnistía Internacional, 2010).
	14. El papel de las comisiones extrajudiciales de investigación y de las comisiones de verdad en los procesos de paz. Aspectos teóricos y experiencia internacional (Ceballos, 2002)
	15. Comisiones de la Verdad en América Latina. La esperanza de un nuevo porvenir (Díaz & Molina, 2016)
	16. Trilogía para ser y caminar: memoria, verdad e historia en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad en Colombia. Posibilidades y retos (Gómez D. , 2017)
	17. Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad. (Ibáñez, 2014)
2. Elementos psicosociales: 10	1. El investigador ante lo indecible y lo inenarrable (una ética de la escucha) / Juan Pablo Aranguren / 2008
	2. Efectos psicosociales de la participación en rituales de justicia transicional / Beristaín, Carlos Martín; Páez, Darío; Rimé, Bernard; Kanyangara, Patrick / 2010
	3. El impacto psicosocial de los procesos transicionales en Chile: evaluación de los efectos de las Comisiones Nacional de “Verdad y Reconciliación” y “prisión política y tortura” / Manuel Cárdenas, Darío Páez y Bernard Rimé / 2013
	4. La metáfora del viaje del héroe en la narración de nietos de expresos políticos: la postmemoria de la prisión política y tortura en Chile / Ximena Faúndez Abarca – Fuad Hatibovic Díaz / 2016
	5. Dimensiones socioemocional e instrumental de la reconciliación social en el conflicto armado colombiano / Mónica Alzate, Diana Rico, María Maza, José-Manuel Sabucedo / 2017
	6. La escucha de la tortura desde el Estado: la experiencia de los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en Chile / Marcela Cornejo, Germán Morales, Juana Kovalskys , Dariela Sharim / 2012
	7. Trauma, testimonio y “verdad” en Los trabajos de la memoria / Elizabeth Jelin / 2012 segunda edición
	8. Propuesta de Atención Psicosocial en el marco de la participación en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición – CEVCNR. Ministerio de Salud, Unidad para las Víctimas, Centro Nacional de Memoria

	Histórica, Agencia Colombiana para la Reintegración /2016
	9. Reflexiones y aproximaciones al trabajo psicosocial con víctimas individuales y colectivas en el marco del proceso de reparación / Olga Rebolledo y Lina Rondón /2010
	10. Trauma psicosocial y memoria: diseño de un dispositivo biográfico para investigar el impacto de la Comisión de Prisión Política y Tortura en Chile / Dariela Sharim, Juana Kovalskys, Germán Morales, Marcela Cornejo / 2011
3. Enfoque de Género en comisiones de la verdad: 5	<p>1. El género en las memorias, en Los trabajos de la memoria / Elizabeth Jelin / 2012 segunda edición</p> <p>2. Comisiones de la Verdad y Género: principios, políticas y procedimientos / Centro Internacional para la Justicia Transicional / 2006</p> <p>3. La mujer dentro del enfoque de género en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición en Colombia a través del planteamiento de justicia como equidad de John Rawls / María Alejandra Lozano Piñeros y Zulvy Nathali Ortega Carrillo / 2017</p> <p>4. Construcción de la verdad con perspectiva de género: un marco teórico feminista y narrativo para el esclarecimiento de las lógicas de la guerra en Colombia / Lina Martínez / 2018</p> <p>5. Recomendaciones para la incorporación del enfoque de género en la futura comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición / Centro Internacional para la Justicia Transicional – ICTJ, ONU Derechos Humanos, Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, Programa de Justicia Transicional del PNUD, ONU Mujeres</p>
4. Memoria y Verdad: 5	<p>1. Algo más que la verdad / Priscilla Hayner / 2001 en El Correo de la UNESCO</p> <p>2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de memorias? en Los trabajos de la memoria / Elizabeth Jelin / 2012 segunda edición</p> <p>3. Reconstrucción de memoria en historias de vida. Efectos políticos y terapéuticos / Nelson Molina Valencia / 2010</p> <p>4. Políticas, espacios y prácticas de memoria. Disputa de tránsitos actuales en Colombia y América Latina. Carlos Salamanca y Jefferson Jaramillo Marín / 2019</p> <p>5. Comisionar la verdad y la memoria en la sociedad. Ruiz</p>

Romero, Gabriel y Marije Hristova. 2019.

5. Testimonio: 3 1. Presentación Violencia, reparación y tecnologías del recuerdo: perspectivas desde África y América

Latina / Grunebaum, Heidi, Castillejo Cuéllar, Alejandro /2007

2. La globalización del testimonio: historia, silencio endémico y los usos de la palabra / Alejandro Castillejo Cuéllar / 2007

3. “Pero si no he acabado...tengo más que contar”: las limitaciones de las narraciones estructuradas de los testimonios públicos / Molly Andrews / 2007

6. Informes comisiones de la verdad: 8 1. Informe de la Comisión de la Verdad. Ecuador 2010. Sin Verdad no hay Justicia

2. Guatemala. Memoria del Silencio. 1999

3. Final Report of the Moroccan Equity and Reconciliation Commission / Diciembre de 2005

4. Informe Final “Anive Hagua Oiko”. Paraguay / 2008

5. Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Perú. /2003

6. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de Chile / Reedición 1996

7. Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report / 1998

8. Liberia. Guía Breve sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación / Amnistía Internacional / 2006

Anexo 2. Consolidado de Comisiones de la Verdad y otras Comisiones de Investigación en el marco de la Justicia Transicional**Listado Corpus Estado de la Cuestión Comisiones de la Verdad**

No.	Continente	País	Nombre Comisión	Año de creación
1	África	Uganda	Comisión de Investigación sobre la Desaparición de Personas en Uganda, 1974	1974
2	América	Brasil	Comisión Especial de investigación sobre Muertos y Desaparecidos Políticos "Brasil Nunca Mais"	1979
3	América	Bolivia	Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados	1982
4	América	Argentina	CONADEP- Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas	1983
5	África	Zimbabwe	Comisión de Investigación de Zimbabwe sobre los disturbios de Matabeleland (también conocida como la Comisión de Investigación Chihambakwe)	1983
6	América	Uruguay	Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron, 1985	1985
7	África	Uganda	Comisión de Investigación sobre las Violaciones de los Derechos Humanos, 1986 (Commission of Inquiry into Violations of Human Rights)	1986
8	América	Chile	Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación	1990

9	África	Chad	Comisión de Investigación sobre los Crímenes y los Abusos Cometidos por el ex Presidente Habré, sus coautores y/o cómplices (Commission d'Enquête sur les Crimes et Détournements Commis par l'Ex Président Habré, ses co-Auteurs et/ou Complices)	1990
10	Asia	Nepal	Comisión de Investigación para localizar a personas desaparecidas durante el periodo Panchayat, 1990.	1990
11	América	El Salvador	Comisión de la Verdad para El Salvador	1992
12	Europa	Alemania	Comisión de la Investigación en el Bundestag Alemán para el Tratamiento del pasado y las Consecuencias de la Dictadura del SED en Alemania 1922.	1992
13	África	Etiopía	Comisión de Investigación, 1993	1993
14	África	Malawi	Comisión de investigación de las muertes políticas en los inicios de 1980	1994
15	Asia	Sri Lanka	Comisión Presidencial de Investigación sobre el Traslado o la Desaparición Involuntarios de Personas en las Provincias Occidental, Meridional y de Sabaragamuwa	1994
16	Asia	Sri Lanka	Comisión Presidencial de Investigación sobre el Traslado o la Desaparición Involuntarios de Personas en las Provincias del Centro, del Noroeste, del Centro Septentrional y de Uv	1994
17	Asia	Sri Lanka	Comisión de Desaparecidos en la Zona occidental	1994

18	América	Haití	Comisión Nacional de Verdad y Justicia (Commission Nationale de Vérité et de Justice)	1995
19	África	Sudáfrica	Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Truth and Reconciliation Commission)	1995
20	Europa	Alemania	Comisión de Investigación sobre la Superación de las Consecuencias de la Dictadura del SED en el Proceso de la Unificación Alemana, 1995	1995
21	África	Burundi	Comisión Internacional de Investigación	1995
22	América	Ecuador	Comisión de la Verdad y Justicia, 1996	1996
23	América	Guatemala	Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)	1997
24	África	Nigeria	Comisión de Investigación de Violaciones de los Derechos Humanos (conocida también como Oputa Commission)	1999
25	África	Ruanda	Comisión de la Unidad Nacional y la Reconciliación (CNUR), 1999	1999
26	América	Uruguay	Comisión para la Paz, 2000	2000
27	Asia	Corea del Sur	Comisión Presidencial para el Esclarecimiento de muertes acaecidas en circunstancias sospechosas, 2000	2000
28	África	Costa de Marfil	Comisión Nacional de Investigación Costa de Marfil	2000
29	América	Perú	Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR)	2001
30	América	Panamá	Comisión de la Verdad, 2001	2001

31	América	Granada	Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2001	2001
32	África	Sierra Leona	Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sierra Leona (Sierra Leonean Truth and Reconciliation Commission)	2002
33	África	Ghana	Comisión Nacional de la Reconciliación (National Reconciliation Commission)	2002
34	Asia	Timor-Leste	Comisión para la Recepción, la Verdad y la Reconciliación (Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação, CAVR)	2002
35	Europa	República Federativa de Yugoslavia	Comisión de la Verdad y la Reconciliación para Serbia y Montenegro, 2002	2002
36	América	Chile	Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura	2003
37	África	República Democrática del Congo	Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2003. En 2004, la Asamblea Nacional y el Senado aprobaron la Ley No.4/2004, que creaba formalmente la Comisión de la Verdad y la Reconciliación.	2003
38	África	Argelia	Comisión ad hoc de Investigación de Desaparecidos	2003
39	África	Marruecos	Comisión de Equidad y Reconciliación (Instance Equit et Réconciliation, IER)	2004
40	América	Paraguay	Comisión de Verdad y Justicia (CVJ)	2004
41	África	Burundi	Comisión Internacional de Investigación	2004

42	Asia	Indonesia	Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2004	2004
43	Asia	Corea del Sur	Comisión de Verdad y Reconciliación, 2005	2005
44	América	Colombia	Comisión de la verdad sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985)	2005
45	Oceanía	Fiyi	Comisión de la Verdad, Ley y Orden, 2005	2005
46	África	Liberia	Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Liberia (Truth and Reconciliation Commission of Liberia)	2006
47	América	Canadá	Comisión de la Verdad y Reconciliación de las Escuelas Residenciales Indígenas	2006
48	América	Ecuador	Comisión de la Verdad, 2007	2007
49	África	Kenia	Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, 2008	2008
50	Oceanía	Islas Salomón	Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2008	2009
51	África	Togo	Comisión de la Verdad, la Justicia y la Reconciliación, 2009	2009
52	África	República de Mauricio	Comisión de la Verdad y la Justicia, 2009	2009
53	América	Honduras	Comisión de la Verdad y la Reconciliación, 2010	2010
54	Asia	Tailandia	Ver ICTJ-KAF	2010
55	América	Brasil	Comisión Nacional de la Verdad de Brasil	2011
56	América	Venezuela	Comisión por la Justicia y la	2011

Verdad, 2011.			
57	América	Colombia	Comisión de la Verdad desde las Mujeres 2013
58	Asia	Nepal	Comisión para la Investigación de Desapariciones (COID) 2014
59	América	Colombia	Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas 2014
60	África	Malí	Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reconciliación 2014
61	América	Venezuela	Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y Tranquilidad Pública, 2017
62	América	Colombia	Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición 2018